

BOLETIN



OFICIAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES, VIERNES 5 DE JULIO DE 2002

AÑO CX

\$ 0,70

Nº 29.935

1ª LEGISLACION
Y AVISOS OFICIALES

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947)

PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA
DR. ANTONIO E. ARCURI
SECRETARIO

DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL
DR. RUBEN A. SOSA
DIRECTOR NACIONAL

Domicilio legal: Suipacha 767
1008 - Capital Federal

Tel. y Fax 4322-3788/3949/
3960/4055/4056/4164/4485

~ ~
www.boletin.jus.gov.ar
Sumario 1ª Sección
(Síntesis Legislativa)
y
3ª Sección

~ ~
e-mail: boletin@jus.gov.ar

Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual
Nº 173.974



DECRETOS

ACTIVIDAD NUCLEAR

Decreto 1178/2002

Facúltase a la Autoridad Regulatoria Nuclear a dictar un nuevo Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la Energía Nuclear a la Medicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Docencia.

Bs. As., 4/7/2002

VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804, su Decreto Reglamentario Nº 1390/98 de fecha 27 de noviembre de 1998, los Decretos Nºs 1540 del 30 de agosto de 1994, 255 del 14 de marzo de 1996, y 236 del 2 de marzo de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 255/96 se aprobó el Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la Energía Nuclear a la Me-

ACTIVIDAD NUCLEAR

Decreto 1178/2002
Facúltase a la Autoridad Regulatoria Nuclear a dictar un nuevo Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la Energía Nuclear a la Medicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Docencia.

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

Decreto 1180/2002
Exceptuase a la contratación de los brigadistas para la lucha contra incendios forestales, de los alcances del Decreto Nº 491/2002.

DELEGACION DE FACULTADES

Disposición 7273/2002-DNM
Reordenamiento legal de diversas facultades que sucesivamente fueron conferidas, restringidas, ampliadas o modificadas en la Dirección Nacional de Migraciones.

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 138/2002-ME y 9/2002-MI
Declárase el estado de desastre agropecuario en diversas localidades de la Provincia de Catamarca, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913.

Resolución Conjunta 139/2002-ME y 10/2002-MI
Declárase el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en diversos departamentos de la Provincia de Córdoba, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913.

Resolución Conjunta 140/2002-ME y 11/2002-MI
Declárase el estado de emergencia y desastre agropecuario a zonas frutihortícolas de diversas localidades de la Provincia de Río Negro, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913.

ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición 3059/2002-ANMAT
Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional del producto rotulado como Piroxicam 20 mg, por 60 comprimidos, lote 0355702, vto. 03/2004, Laboratorio Baden.

Disposición 3061/2002-ANMAT
Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de productos rotulados como Novalgina Jarabe, Laboratorio Hoechst Marion Roussell.

EXENCION DE GRAVAMENES

Resolución 144/2002-ME
Exímese del pago del derecho de exportación que grava la exportación para consumo de un avión sanitario, que fuera entregado como parte de pago de una nueva unidad que será utilizada por las autoridades sanitarias de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

SUMARIO

Pág.		Pág.		Pág.
	IMPUESTOS Resolución General 1309-AFIP Procedimiento. Sistema de acreditación de inscripción. Nueva "Constancia de Inscripción" y "Credencial Fiscal". Plazo especial. Resolución General Nº 663 y sus modificaciones. Su modificación.	10		Nación, a los fines de atender los requerimientos de pagos urgentes en los Servicios Administrativos Financieros. 7
1	Resolución General 1310-AFIP Impuesto al Valor Agregado. Resolución General Nº 18, sus modificatorias y complementarias. Resolución General Nº 39 y sus modificaciones. Nómina de sujetos comprendidos.	10		PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO Disposición 2419/2002-ANMAT Clausúrase la Droguería Florida S.R.L. como distribuidor de productos para diagnóstico de uso in vitro. 11
2	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Decreto 1176/2002 Dase por designados Asesores en el Gabinete de Asesores de la Unidad Jefe de Gabinete de Ministros.	2		SERVICIOS PUBLICOS Decreto 1174/2002 Establécese la obligación para prestadores de servicios públicos que decidan el corte de los mismos por falta de pago, de comunicar dicha decisión a los establecimientos públicos de carácter asistencial, sanitario u hospitalario, escuelas, colegios e instituciones educacionales públicas y de las fuerzas armadas y de seguridad, y a los Ministros o Secretarios de la Presidencia de la Nación de los cuales dependan. 4
12	MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Decreto 1177/2002 Apruébase un contrato celebrado en el marco del Decreto Nº 1184/2001.	2		SISTEMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Resolución General 9/2002 -IGJ Contratos bajo la modalidad de "grupos cerrados". Régimen de diferimientos. Información a la Inspección General de Justicia. Reinscripciones de prendas libres de gastos para los suscriptores. Garantía mínima de las adjudicaciones. Importes percibidos en exceso. Diferimiento. Evolución de la cuotaparte. Intereses punitivos. Eliminación de la multa por renuncia, rescisión o resolución contractual. Derecho al haber de reintegro; oportunidad. Reducción de cargas administrativas. Reconocimiento obligatorio de bonificaciones. Seguros. Derecho del suscriptor a la contratación del seguro. Responsabilidad. Pago parcial de la indemnización. Distribución periódica de importes por multas. Suscriptores morosos. Gestiones de cobranza extrajudicial. Obligatoriedad de planes de regularización. Ejecución judicial. Facilidades de pago. Evolución y evaluación del régimen. Vigencia. 8
7	MINISTERIO DE DEFENSA Decreto 1187/2002 Designaciones con carácter transitorio.	6		TRANSPORTE AEROCOMERCIAL Decreto 1179/2002 Autorízase a la empresa Línea Aérea Nacional Chile S.A. (LAN CHILE) a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de gran porte. 5
8	MINISTERIO PUBLICO Decreto 1171/2002 Acéptase la renuncia de la Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 4.	3		VETO Decreto 1172/2002 Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.609. 4
8	PRESIDENCIA DE LA NACION Decreto 1181/2002 Apruébase un contrato celebrado por la Secretaría General en el marco del Decreto Nº 1184/2001.	3		DECRETOS SINTETIZADOS 6
11	Decreto 1183/2002 Exceptuase a la Secretaría de Cultura de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 25.565 a los efectos de proceder a la cobertura de cargos en la Orquesta Sinfónica Nacional y a la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto".	3		RESOLUCIONES SINTETIZADAS 10
12	Decreto 1184/2002 Apruébase una contratación en la Secretaría de Turismo y Deporte, en el marco del Decreto Nº 1184/2001.	3		AVISOS OFICIALES
	Decreto 1185/2002 Apruébase una contratación efectuada por la Secretaría de Cultura, en el marco del Decreto Nº 1184/2001.	4		Nuevos 13
	Decreto 1186/2002 Designase Director General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica.	4		Anteriores 32
7	Resolución Conjunta 3/2002-SG y 109/2002-ME Adécuanse los Fondos Rotatorios de la Jurisdicción 2000 - Presidencia de la			

dicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Docencia.

Que la aplicación del citado Régimen fue asumida por el ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR, de conformidad con el Artículo 2º del Decreto Nº 1540/94 que le asignó al mismo las funciones de fiscalización y de regulación de la actividad nuclear.

Que posteriormente por Ley Nº 24.804 se creó la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR como sucesora del ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR.

Que el Artículo 8º de la citada Ley establece que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR desarrollará las funciones de regulación y control con los fines de proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares, asegurar que dichas actividades no sean desarrolladas con fines no autorizados por la referida Ley, las normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos internacionales y las políticas de no proliferación nuclear, y prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros materiales o equipos sujetos a regulación y control.

Que el Artículo 16 de la Ley antes señalada establece que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR aplicará sanciones, y señala en forma genérica las penas aplicables, sin definir los hechos punibles y las sanciones o penas que les corresponderían.

Que el referido Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la Energía Nuclear a la Medicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Docencia aprobado por el Decreto Nº 255/96 era de aplicación antes de la entrada en vigencia de la citada Ley, definiéndose en él los hechos punibles y estableciéndose las penas que les corresponden a los mismos.

Que atento a ello resultó necesario dictar el Decreto Nº 236/98 a los fines de ajustar el texto del citado Régimen de Sanciones, para que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR pueda aplicar sanciones dentro del margen, de discrecionalidad otorgado por el Artículo 16 inciso g) de la Ley Nº 24.804.

Que posteriormente, el Decreto Nº 1390/98 Reglamentario de la citada Ley dispuso en el inciso g) del Artículo 16 de su Anexo I, que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR estableciera sendos regímenes de sanciones por incumplimiento de las normas de seguridad radiológica en las aplicaciones de la energía nuclear a la medicina, al agro, a la industria y a la investigación y docencia, así como por incumplimiento de las normas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y salvaguardias en centrales nucleares y otras instalaciones nucleares relevantes.

Que de acuerdo a lo antedicho, el citado organismo dictó por Resolución del Directorio Nº 63 del 5 de mayo de 1999 el régimen de sanciones aplicables a las centrales nucleares y por Resolución del Directorio Nº 24 del 11 de noviembre de 1999 el correspondiente Régimen para otras instalaciones radiactivas relevantes, mientras que para la medicina, el agro, la industria y la investigación y docencia, continuó aplicándose el Régimen de sanciones dictado por los Decretos Nºs 255/96 y 236/98 por ser adecuado a la normativa de seguridad radiológica vigente.

Que según los antecedentes precitados y en concordancia con lo establecido en el Decreto Nº 1390/98, resulta conveniente facultar a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR a dictar los regímenes de sanciones por incumplimiento de las normas regulatorias referidas a la materia de su competencia, y a modificarlos toda vez que las circunstancias lo requieran.

Que atento a ello es necesario que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR dicte un nuevo Régimen de Sanciones que reemplace al Régimen de Sanciones aprobado por los Decretos Nº 255/96 y 236/98, a fin de adecuarlo a las modificaciones que ese organis-

mo ha introducido en la clasificación de las instalaciones que fiscaliza, y que consecuentemente es necesario establecer una fecha de derogación de dichos Decretos.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99 Incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA

Artículo 1º — Deróganse a partir del día 31 de agosto de 2002, los Decretos Nºs 255/96 y 236/98.

Art. 2º — Establécese que la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, en función de lo previsto en la Ley Nº 24.804 y en su Decreto Reglamentario Nº 1390/98, pondrá en vigencia a partir del día 31 de agosto de 2002, un régimen de sanciones que reemplace al Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las Aplicaciones de la Energía Nuclear a la Medicina, al Agro, a la Industria y a la Investigación y Docencia que fuera aprobado por los Decretos indicados en el ARTICULO 1º del presente Decreto.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Jorge R. Matzkin.

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

Decreto 1180/2002

Exceptúase a la contratación de los brigadistas para la lucha contra incendios forestales, de los alcances del Decreto Nº 491/2002.

Bs. As., 4/7/2002

VISTO el Expediente Nº 000340/02 del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES de la SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE de la PRESIDENCIA DE LA NACION, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y 601 del 11 de abril de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que como consecuencia del dictado del Decreto Nº 491/02, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha asumido el control directo e inmediato de las designaciones, contrataciones y determinados movimientos de personal en el ámbito de su competencia.

Que a través del Decreto Nº 601/02 se ha procedido a reglamentar la instrumentación de la norma precitada para asegurar el mejor cumplimiento de sus disposiciones y permitir el eficaz funcionamiento de las distintas áreas de la Administración Pública Nacional, precisándose sus alcances.

Que en el mismo orden de ideas resulta necesario incorporar en los alcances de las disposiciones comentadas precedentemente, la consideración de determinadas situaciones especiales de desempeño de actividades críticas.

Que en ese sentido, el artículo 4º del Decreto Nº 601/02 ha facultado a los respectivos titulares de jurisdicciones, organismos y entidades a efectuar designaciones y contrataciones de personal docente para desempeñar al frente de alumnos en atención al servicio esencial que reviste dicho desempeño.

Que de igual forma se considera conveniente extender dicha facultad para contratar a los brigadistas contra incendios forestales que se desempeñan en el área de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, en virtud de las particulares características de las funciones que éstos desarrollan.

Que resulta relevante señalar que, para poder hacer frente eficientemente a los sinies-

tros, la contratación debe ser incrementada en las temporadas de riesgo de acuerdo a las zonas, por lo que se hace necesario, en consecuencia, que el trámite de la contratación sea lo más ágil posible.

Que es de destacar que dadas las características de las especiales funciones desarrolladas por los brigadistas, éstos se encuentran regidos por un reglamento especial, aprobado por la Resolución de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES Nº 046 del 13 de marzo de 2001, que establece los requisitos y el mecanismo de ingreso, las características del servicio y la evaluación de dicho personal, lo cual demuestra en forma acabada la especificidad de las tareas y el carácter crítico de las mismas.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Las contrataciones de los brigadistas para la lucha contra los incendios forestales, encuadradas en la Resolución de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES Nº 046 del 13 de marzo de 2001 aprobatoria del Reglamento de personal contratado para el manejo del fuego en jurisdicción de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, dependiente de la SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE de la PRESIDENCIA DE LA NACION, quedan comprendidas en los términos establecidos por el artículo 4º del Decreto Nº 601 del 11 de abril de 2002. A este efecto se deberá acreditar fehacientemente y en los términos previsto en el precitado artículo 4º, el cumplimiento del requisito de desempeño de la referida función.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Jorge R. Matzkin.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 1176/2002

Dase por designados Asesores en el Gabinete de Asesores de la Unidad Jefe de Gabinete de Ministros.

Bs. As., 4/7/2002

VISTO las Decisiones Administrativas Nº 477 del 16 de setiembre de 1998, Nº 1 del 12 de enero de 2000, y el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por la medida citada en primer término se estableció la integración de los Gabinetes de las Unidades Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios, los que estarán integrados con el equivalente a la cantidad de Unidades Retributivas que se detallan en la planilla anexa al artículo 8º de la Decisión Administrativa Nº 1 del 12 de enero de 2000, sustitutiva de la planilla similar anexa al artículo 1º de la medida citada en el Visto de la presente.

Que, además, el artículo 5º de la precitada decisión administrativa determinó que las plantas de Asesores de Gabinete independientes de las que fijaba el Decreto Nº 736 del 29 de abril de 1992, se mantenían vigentes.

Que sobre la base de dichas normas, corresponde disponer la cobertura de CINCO (5) de esos cargos que se encuentran vacantes.

Que conforme al régimen aludido procede efectuar, las designaciones del Profesor D. Julio Felix GODIO y de los Doctores, D. Beltrán Jorge LAGUYAS, Da. Gladys Esther VERDIER, Da. Oriana Laura SAENZ y D. Luis Al-

berto ORREGO como Asesores Nivel A - Grado 8 en el Gabinete de Asesores de la UNIDAD JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el Decreto Nº 491/2002 establece que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada — en los términos del artículo 2º del Decreto Nº 23 del 23 de diciembre de 2001 — en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y a tenor de lo establecido por el artículo 1º del Decreto 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por designados a partir del 10 de mayo de 2002, como Asesores Nivel A -Grado 8 en el Gabinete de Asesores de la UNIDAD JEFE DE GABINETE DE MINISTROS al Profesor D. Julio Félix GODIO (D.N.I. Nº 5.175.445) y a los Doctores, D. Beltrán Jorge LAGUYAS (D.N.I. Nº 5.323.733), Da. Gladys Esther VERDIER (D.N.I. Nº 14.796.819), Da. Oriana Laura SAENZ (D.N.I. Nº 23.829.088) y D. Luis Alberto ORREGO (D.N.I. Nº 5.161.750).

Art. 2º — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof.

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Decreto 1177/2002

Apruébase un contrato celebrado en el marco del Decreto Nº 1184/2001.

Bs. As., 4/7/2002

VISTO los Decretos Nº 491 del 12 de marzo de 2002 y Nº 601 del 11 de abril de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 491/02 estableció que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada —en los términos del artículo 2º del Decreto Nº 23 del 23 de diciembre de 2001— en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que el Decreto Nº 601/02 estableció que las disposiciones del Decreto Nº 491/02 son aplicables a la celebración, renovación y/o prórroga de toda contratación de servicios personales y de obra intelectual, incluidos los de locación de servicios celebrados en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 1184 del 20 de septiembre de 2001, y los contratos de locación de obra intelectual prestados a título personal encuadrados en los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y 436 del 30 de mayo de 2000, como así también los con-

BOLETIN OFICIAL Nº 29.935 1ª Sección			Viernes 5 de julio de 2002	4
<p>Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Jorge R. Matzkin.</p> <p>NOTA: Este decreto se publica sin el Anexo I. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).</p> <p>PRESIDENCIA DE LA NACION</p> <p>Decreto 1185/2002</p> <p>Apruébase una contratación efectuada por la Secretaría de Cultura, en el marco del Decreto Nº 1184/2002.</p> <p>Bs. As., 4/7/2002</p> <p>VISTO el Expediente Nº 1395/02 del Registro de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que en virtud de los Decretos Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y Nº 601 de fecha 11 de abril de 2002, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ejerce, en el ámbito de su competencia, el control directo e inmediato de las designaciones, contrataciones y determinados movimientos de personal.</p> <p>Que atento ello la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, ha elevado una propuesta para contratar personal bajo el Régimen del Decreto Nº 1184/01, a fin de complementar y fortalecer la labor de esa Jurisdicción, informando que para tal fin, cuenta con créditos disponibles en las partidas presupuestarias específicas.</p> <p>Que la persona cuya contratación se propone reúne los requisitos de idoneidad necesarios para cumplir las tareas que se indican.</p> <p>Que el AREA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención que le compete.</p> <p>Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, incisos 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y 1º del Decreto Nº 491/02.</p> <p>Por ello,</p> <p>EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:</p> <p>Artículo 1º — Apruébase la contratación del personal cuyo apellido, nombres, función y rango, tipo y número de documento, monto mensual y total y por el período que consta en el Anexo I que integra el presente decreto, bajo el régimen del Decreto Nº 1184/01, en el marco de las contrataciones individuales de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.</p> <p>Art. 2º — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo al presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.</p> <p>Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Jorge R. Matzkin.</p> <p>NOTA: Este Decreto se publica sin el anexo I. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).</p> <p>PRESIDENCIA DE LA NACION</p> <p>Decreto 1186/2002</p> <p>Designase Director General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica.</p> <p>Bs. As., 4/7/2002</p> <p>VISTO la Ley Nº 25.565, el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, y lo solicitado por la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y</p>	<p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que por la citada Ley se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2002.</p> <p>Que por el artículo 19 de la mencionada Ley se establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes al 1º de enero de 2002, ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS o del PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del artículo 58 de la citada Ley.</p> <p>Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargo de planta permanente y no permanente será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional a a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.</p> <p>Que, en el ámbito de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION se encuentra vacante el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, que por la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada Jurisdicción, resulta necesario proceder a su inmediata cobertura, exceptuándolo a tal efecto de lo establecido en el artículo 19 de la citada Ley y de lo dispuesto por el Título III, Capítulo III, y artículo 71 - primer párrafo, primera parte, del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).</p> <p>Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.</p> <p>Que se ha dado cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos para la cobertura del citado cargo, a los efectos de proceder a la designación transitoria en cuestión.</p> <p>Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1º de la CONSTITUCION NACIONAL y de los artículos 19 y 58 de la Ley Nº 25.565 y lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 491/02</p> <p>Por ello,</p> <p>EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:</p> <p>Artículo 1º — Designase Director General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, Nivel A Grado 0, con Función Ejecutiva I, al Doctor Máximo Alberto EZQUIAGA (D.N.I. Nº 10.400.971).</p> <p>Art. 2º — La designación en el cargo aludido se dispone, con carácter de excepción, a lo establecido en el Título III, Capítulo III y en el artículo 71, primer párrafo, primera parte, del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), y a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Nº 25.565.</p> <p>Art. 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida serán atendidos con cargo a las partidas especiales correspondientes al Programa 20 - Asistencia Legal y Técnica - de la Jurisdicción 20-01.</p> <p>Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Jorge R. Matzkin.</p> <p>VETO</p> <p>Decreto 1172/2002</p> <p>Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.609.</p> <p>Bs. As., 4/7/2002</p> <p>VISTO el Expediente Nº 020-005360/2002 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y el Proyecto de Ley Nº 25.609 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 12 de junio de 2002, y</p>	<p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que el Artículo 1º del Proyecto de Ley mencionado en el Visto establece que, en el ámbito de la Nación, los prestadores de servicios públicos “no podrán suspender por falta de pago la prestación de dichos servicios cuando éstos sean indispensables para el funcionamiento de los establecimientos públicos de carácter asistencial, sanitario u hospitalario, de las escuelas, colegios e instituciones educacionales públicas y de las fuerzas armadas y de seguridad”.</p> <p>Que por el Artículo 2º del Proyecto de Ley mencionado se delega en el PODER EJECUTIVO NACIONAL el establecimiento de un sistema de débitos y créditos automáticos compensador de las acreencias del Sector Público Nacional y de los prestadores de los servicios públicos involucrados.</p> <p>Que la Ley Nº 25.561 deja sin efecto las cláusulas de ajuste en dólares o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias y, a su vez, autoriza al Estado Nacional a renegociar los contratos de concesión de obras y servicios públicos teniendo en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.</p> <p>Que en virtud de ello, el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través del Decreto Nº 293 de fecha 12 de febrero de 2002, creó una Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA con el objeto de readecuar los contratos de concesión a la realidad económica actual, a fin de preservar los derechos de los usuarios y consumidores a acceder a esos servicios así como la calidad en la prestación de los mismos.</p> <p>Que resulta necesario preservar al Estado Nacional de eventuales reclamos que resultaren en una situación general aún más gravosa a raíz de incumplimientos contractuales en forma unilateral, como efectivamente lo sería modificar las ecuaciones económicas y financieras de los contratos de concesión que se tuvieron en cuenta al momento de otorgar dichas concesiones.</p> <p>Que, efectivamente, la posibilidad cierta de cortes de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de las actividades en instituciones sanitarias, educacionales y de seguridad podría provocar una merma en la calidad de los servicios que dichas instituciones brindan a la sociedad.</p> <p>Que se han impartido precisas instrucciones a la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA a fin de que arbitre los medios necesarios para evitar el corte de los servicios públicos involucrados en el Proyecto de Ley bajo análisis, con el objeto de posibilitar el adecuado funcionamiento de las instituciones que se intenta preservar, y a la vez resguardar los derechos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, todo ello con el afán de recomponer la normal prestación de los mismos y el legítimo derecho al cobro por parte de quien provee el servicio.</p> <p>Que, asimismo, el Artículo 1º del Proyecto de Ley no es equitativo con respecto al esfuerzo que deben realizar los usuarios restantes de honrar en tiempo y forma con el pago del servicio.</p> <p>Que el Artículo 1º del Proyecto de Ley se contrapone con lo establecido en los contratos de concesión de servicios públicos ya que en el cuadro tarifario vigente no se encuadra al usuario por la actividad que realiza sino por sus características consuntivas, con lo cual el Proyecto de Ley no contribuye al cumplimiento de lo establecido oportunamente entre el Estado Nacional, en su rol de concedente, y las Concesionarias de Servicios Públicos, a través de los respectivos contratos de concesión de servicios públicos vigentes.</p> <p>Que el Artículo 2º del Proyecto de Ley no define claramente cuál es el mecanismo que propone para compensar las acreencias</p>	<p>ahondando la incertidumbre económica financiera de los actores involucrados.</p> <p>Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.</p> <p>Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 83 de la CONSTITUCION NACIONAL.</p> <p>Por ello,</p> <p>EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:</p> <p>Artículo 1º — Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.609.</p> <p>Art. 2º — Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.</p> <p>Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Roberto Lavagna.</p> <p>SERVICIOS PUBLICOS</p> <p>Decreto 1174/2002</p> <p>Establécese la obligación para prestadores de servicios públicos que decidan el corte de los mismos por falta de pago, de comunicar dicha decisión a los establecimientos públicos de carácter asistencial, sanitario u hospitalario, escuelas, colegios e instituciones educacionales públicas y de las fuerzas armadas y de seguridad, y a los Ministros o Secretarios de la Presidencia de la Nación de los cuales dependen.</p> <p>Bs. As., 4/7/2002</p> <p>VISTO el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.609, y el Decreto Nº 1172 del 4 de julio de 2002, y</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que a través del artículo 1º del Proyecto de Ley Nº 25.609 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION con fecha 12 de junio de 2002, se determinó que en el ámbito de la Nación, los prestadores de servicios públicos de provisión de agua potable y desagüe cloacal y de suministro de energía eléctrica, gas y de telefonía, no podrán suspender por falta de pago la prestación de dichos servicios cuando éstos sean indispensables para el funcionamiento de los establecimientos públicos de carácter asistencial, sanitario u hospitalario, escuelas, colegios e instituciones educacionales públicas y de las fuerzas armadas y de seguridad.</p> <p>Que por medio del Decreto citado en el Visto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la observación total del Proyecto de Ley mencionado.</p> <p>Que dicha observación se fundamentó en la necesidad de preservar al Estado Nacional de eventuales reclamos que conduzcan a una situación general aún más gravosa, a raíz de incumplimientos contractuales en forma unilateral.</p> <p>Que, por otra parte, el PODER EJECUTIVO NACIONAL al observar el mentado Proyecto de Ley, tuvo en cuenta la inequidad respecto al esfuerzo que deben realizar los restantes usuarios de honrar en tiempo y forma con el pago del servicio.</p> <p>Que el Gobierno Nacional también consideró que el Proyecto de Ley no definió claramente cual es el mecanismo que propone para compensar las acreencias, ahondando la incertidumbre económico-financiera de los actores involucrados; no contribuyendo, al cumplimiento de lo establecido oportunamente entre el Estado Nacional en su carácter de concedente, y las concesionarias de servicios públicos a través de los respectivos contratos de concesión de servicios públicos vigentes.</p>	

Que, no obstante ello, y teniendo en cuenta los fundamentos oportunamente contemplados por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION al sancionar el Proyecto de Ley Nº 25.609, y la circunstancia de que dicho proyecto se refiere a servicios esenciales que el Estado Nacional debe garantizar a la comunidad, resulta necesario establecer, para el supuesto de que los prestadores de servicios públicos decidan el corte de los servicios públicos referidos precedentemente, por falta de pago, la obligación de comunicar dicha decisión tanto a las instituciones involucradas como a los señores Ministros, o Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION de los cuales éstas dependan, con una anticipación no menor de TREINTA (30) días hábiles administrativos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Establécese, que ante la falta de pago por parte de los establecimientos públicos de carácter asistencial, sanitario u hospitalario, escuelas, colegios e instituciones educacionales públicas y de las fuerzas armadas y de seguridad, en todo el ámbito de la Nación, de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagüe cloacal y de suministro de energía eléctrica, gas y de telefonía, la decisión de suspender tales servicios por parte de sus prestadores, deberá ser comunicada fehacientemente a dichas instituciones, como así también a los señores Ministros, o Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION de los cuales éstas dependan, con una antelación no menor de TREINTA (30) días hábiles administrativos.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Roberto Lavagna.

TRANSPORTE AEROCOMERCIAL

Decreto 1179/2002

Autorízase a la empresa Línea Aérea Nacional Chile S.A. (LAN CHILE) a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de gran porte.

Bs. As., 4/7/2002

VISTO el expediente Nº 559-000394/2001 del Registro del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y

CONSIDERADO:

Que por el mencionado expediente la empresa de bandera chilena LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A. (LAN CHILE) solicita autorización para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte en las rutas PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE); PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) - RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) y PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA) - PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE).

Que tal operatoria se ajusta a las previsiones contenidas en el Acta Final de Reunión de Consulta suscripta entre las autoridades aeronáuticas de la REPUBLICA ARGENTINA y de la REPUBLICA DE CHILE el 14 de agosto de 1996, que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países.

Que de acuerdo con lo convenido bilateralmente no existen en materia de derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades limitaciones en cuanto a rutas, frecuencias y material de vuelo a utilizar, previéndose incluso la posibilidad de extender las operaciones a más de un punto en un mismo territorio.

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, mediante Notas Letras DIMAS Nº 195 del 8 de mayo de 2001 y Nº 341 del 23 de agosto de 2001 de su DIRECCION DE MALVINAS E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, se ha pronunciado favorablemente respecto del pedido empresario.

Que, por otra parte, la autoridad aeronáutica chilena ha autorizado a la solicitante para operar los servicios descriptos en las rutas requeridas.

Que asimismo, se ha cumplido con el procedimiento de designación de la empresa por vía diplomática.

Que teniendo en cuenta que se trata de la explotación por una línea aérea extranjera de rutas de cabotaje en lo que se refiere a los tramos RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) y PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA) y de conformidad con lo establecido por el Artículo 97 (segundo párrafo) de la Ley Nº 17.285 (CODIGO AERONAUTICO), resulta necesario que el PODER EJECUTIVO NACIONAL otorgue a través de un decreto la excepción a la reserva de cabotaje que prevé dicha norma.

Que la interesada ha cumplimentado los demás recaudos exigidos por las normas legales en vigor.

Que razones de economía de procedimiento aconsejan unificar en un solo instrumento la autorización de las rutas internacionales peticionadas y la relativa a la excepcionalidad en lo que al cabotaje se refiere.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la intervención que le compete

Que la presente medida se dicta en virtud de lo determinado por el Artículo 129 y por el Artículo 97 ambos de la Ley Nº 17.285 (CODIGO AERONAUTICO).

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Autorízase a la empresa de bandera chilena LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A. (LAN CHILE) a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de gran porte, en las siguientes rutas:

a) PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE);

b) PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) - RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE); y

c) PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA) - PUNTA ARENAS (REPUBLICA DE CHILE).

Art. 2º — Autorízase asimismo al transportador chileno el ejercicio de derechos de tráfico en los tramos de cabotaje RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA) - PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) y PUERTO ARGENTINO (REPUBLICA ARGENTINA) - RIO GALLEGOS (REPUBLICA ARGENTINA).

Art. 3º — Facúltase a la SECRETARIA DE TRANSPORTE, dependiente del MINISTERIO DE LA PRODUCCION a acordar con las autoridades aeronáuticas chilenas las modalidades de la prestación de los servicios aéreos mencionados en el Artículo 2º del presente decreto, debiendo partici-

par en dichas negociaciones el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Art. 4º — Las prestaciones deberán iniciarse dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días siguientes a la fecha de notificación del presente decreto.

Art. 5º — La empresa operará sus servicios de conformidad con la autorización y la designación efectuadas por el Gobierno de su país y con estricta sujeción a lo acordado bilateralmente en materia de transporte aéreo, así como también a las leyes y demás normas nacionales e internacionales vigentes y a las condiciones de reciprocidad de tratamiento por parte de las autoridades de la REPUBLICA DE CHILE para con las empresas de bandera argentina que soliciten similares servicios.

Art. 6º — Antes de iniciar las operaciones, la beneficiaria deberá someter a consideración de la autoridad aeronáutica para su aprobación, sus sistemas de operaciones, de comunicaciones, de mantenimiento de sus aeronaves, libros de quejas, horarios, las tarifas que serán aplicadas, la

concertación de los seguros de ley por riesgos emergentes de dichas prestaciones, correspondiendo idéntico trámite a toda incorporación, sustitución o modificación de la capacidad comercial de sus aeronaves, así como la iniciación y eventual suspensión y/o reanudación de sus servicios.

Art. 7º — La transportadora deberá remitir mensualmente a la SECRETARIA DE TRANSPORTE, dependiente del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, un detalle completo de los transportes realizados durante ese período, así como también cualquier otro dato que dicha autoridad le requiera.

Art. 8º — La empresa deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 82 de fecha 20 de noviembre de 2000, emanada de la ex-SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIENDA.

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Roberto Lavagna. — Carlos F. Ruckauf.

REVISTA DE LA PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION

De aparición semestral, con servicio de entrega de boletines bimestrales

Contiene:

DOCTRINA DE LA PROCURACION	DICTAMENES DE LA PROCURACION	JURISPRUDENCIA Y TEXTOS NORMATIVOS
Incluye sumarios ordenados temáticamente, además de índices numérico, de disposiciones legales y de partes.	Todos aquellos que contienen doctrina en texto completo, clasificados temática y numéricamente precedidos por los sumarios que reseñan su contenido.	Seleccionados por su novedad e importancia con sus correspondientes índices para facilitar la consulta.

La suscripción del año 2002 incluye el tomo del DIGESTO, que contiene la doctrina de la Procuración del Tesoro desde el año 1997 al año 1999, inclusive.

Precio de la suscripción \$ 200 por año

Usted podrá suscribirse en la casa central de LA LEY
-Ente Cooperador Ley 23.412-
Tucumán 1471 - 3º piso - (1050) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4378-4766/7 - www.laley.com.ar
o en las sucursales de la Editorial en todo el país.

MINISTERIO DE DEFENSA

Decreto 1187/2002

Designaciones con carácter transitorio.

Bs. As., 4/7/2002

VISTO la Ley Nº 25.565, el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002 y lo solicitado por el MINISTERIO DE DEFENSA, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio del año 2002.

Que el artículo 19 de la mencionada Ley establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados al 1º de enero de 2002, ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del artículo 58 de la citada Ley.

Que mediante Decreto Nº 491/02, se estableció, entre otras medidas, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Que a fin de permitir el normal desenvolvimiento de distintas áreas del MINISTERIO DE DEFENSA, resulta necesario designar en cargos con funciones ejecutivas, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a agentes que revistan en la planta permanente de dicho Ministerio y que se encuentran transitoriamente a cargo de las mismas.

Que a tal efecto resulta necesario exceptuar a dichos funcionarios del cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la citada Ley Nº 25.565 y de lo dispuesto en el Título III; Capítulos I, II y III y VI, artículo 71 —primer párrafo, primera parte, del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995)—.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NACIONAL y de los artículos 19 y 58 de la Ley Nº 25.565 y lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

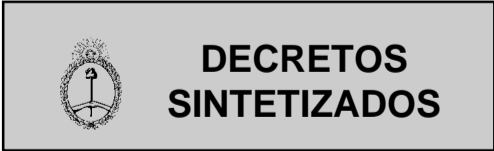
Artículo 1º — Designase con carácter transitorio, en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, a las personas que se consignan en el Anexo I, conforme el detalle obrante en el mismo. Las designaciones en los cargos aludidos se disponen con carácter de excepción a lo establecido en el Título III, Capítulos I, II y III y VI, artículo 71 — primer párrafo, primera parte, del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Nº 25.565.

Art. 2º — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los sistemas de selección previstos por el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA —Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995)— en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la notificación de las respectivas designaciones transitorias.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — José H. Jaunarena.

ANEXO I				
CARGO	APELLIDO Y NOMBRES	M.I. Nº	NIV.Y GRAD.	FUNCION EJECUTIVA
DIRECTOR DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS	POMAR, Gregorio	7.598.698	A - 0	I
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	OLGUIN, Jorge Roberto	4.277.387	A - 0	I
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO	RODRIGUEZ, Noemí Inés	6.264.631	A - 0	I
DIRECTOR NACIONAL DEL ANTARTICO	MOLINARI, Angel Ernesto	8.461.104	A - 0	II
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL	LAIÑO, Aníbal Ulises	4.878.918	A - 0	II
COORDINADOR DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACION	WOLL, Tomás Rolan	14.157.934	B - 0	IV
AUDITOR ADJUNTO OPERACIONAL	HUERTA, Alejandro Horacio	13.228.670	A - 0	I

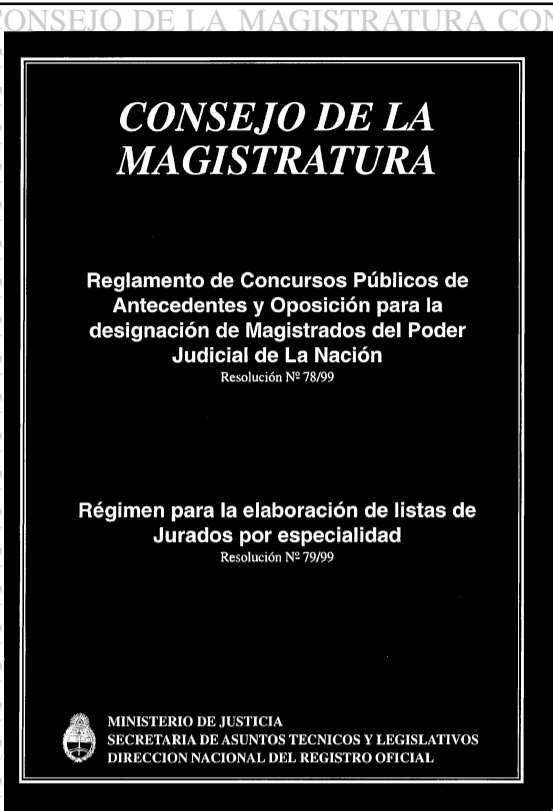


PRESIDENCIA DE LA NACION

Decreto 1182/2002

Bs. As., 4/7/2002

Recházase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Miguel Ceruse (DNI 4.087.813) contra la Resolución ex S.C.M.C. Nº 220 de fecha 13 de junio de 2001 por la que se dispuso el cese del citado.



“Después de un siglo y medio largo de designación de jueces por un método constitucional diferente, abordaremos con estas dos herramientas fundamentales y perfectibles la ardua tarea de seleccionar a los mejores, para que ellos puedan, en su futuro accionar, devolver a la Justicia la confianza y credibilidad que nunca debió haber perdido”.

Juan M. Gersenobitz,

Presidente. Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial

*** Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación.**

— Designación de integrantes del Jurado - Llamados a concurso - Actuación del Jurado - Etapas del procedimiento ante la Comisión - Prueba de oposición - Informe del Jurado - Dictamen de la Comisión - Audiencia Pública con el Plenario - Decisión del Plenario.

*** Régimen para la Elaboración de Listas de Jurados por Especialidad.**

— Propuestas por las Entidades - Colegios de Abogados - Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional - Facultades de Derecho - Exclusiones.

SEPARATA
Valor \$ 1.-
VENTAS: Suipacha 767, Capital Federal, de 11.30 a 16 hs.

PUBLICACIONES DE DECRETOS Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto Nº 15.209 del 21 de noviembre de 1959, en el Boletín Oficial de la República Argentina se publicarán en forma sintetizada los actos administrativos referentes a presupuestos, licitaciones y contrataciones, órdenes de pago, movimiento de personal subalterno (civil, militar y religioso), jubilaciones, retiros y pensiones, constitución y disolución de sociedades y asociaciones y aprobación de estatutos, acciones judiciales, legítimo abono, tierras fiscales, subsidios, donaciones, multas, becas, policía sanitaria animal y vegetal y remates.

Las Resoluciones de los Ministerios y Secretarías de Estado y de las Reparticiones sólo serán publicadas en el caso de que tuvieran interés general.

NOTA: Los actos administrativos sintetizados y los anexos no publicados pueden ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal)



RESOLUCIONES

Ministerio de Economía

EXENCION DE GRAVAMENES

Resolución 144/2002

Exímese del pago del derecho de exportación que grava la exportación para consumo de un avión sanitario, que fuera entregado como parte de pago de una nueva unidad que será utilizada por las autoridades sanitarias de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Bs. As., 2/7/2002

VISTO el Expediente Nº 020-004947/2002 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR solicita la exención de los derechos de exportación que gravan la exportación para consumo de un avión sanitario, marca LEAR JET, modelo 35A, serie 408, año de fabricación 1981, que fuera entregado como parte de pago de un nuevo avión sanitario que será utilizado por las autoridades sanitarias de la referida provincia.

Que, en atención a lo expuesto, como así también teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en el caso, puede accederse a lo solicitado, de conformidad con la facultad otorgada al PODER EJECUTIVO NACIONAL para acordar exenciones al pago del derecho de exportación por el artículo 757, apartados 1. y 2., incisos a) y f) del Código Aduanero (Ley Nº 22.415), con las finalidades —entre otras— de atender las necesidades de la salud pública y dar solución a los problemas que se suscitaren con ocasión de exportaciones de carácter no comercial.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que, en consecuencia, procede ejercer la facultad precedentemente referida, la que fuera delegada en el suscripto por el artículo 2º, inciso d), apartado 4) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE:

Artículo 1º — Exímese a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR del pago del derecho de exportación que grava la exportación para consumo de un avión sanitario, marca Lear Jet, modelo 35A, serie 408, año de fabricación 1981, entregado como parte de pago por la adquisición de un nuevo avión sanitario que será utilizado por las autoridades sanitarias de dicha provincia.

Art. 2º — La franquicia que se acuerda en el artículo anterior queda condicionada a que la mercadería de que se trata sea afectada al destino invocado, circunstancia ésta que deberá acreditarse ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (DIRECCION GENERAL DE ADUANAS) cada vez que ésta lo requiera.

Art. 3º — La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (DIRECCION GENERAL DE ADUANAS) tomará conocimiento, notificará a la interesada y arbitrará las medidas necesarias para la aplicación de la presente.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Roberto Lavagna.

Ministerio de Economía y Ministerio del Interior

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 138/2002 y 9/2002

Declárase el estado de desastre agropecuario en diversas localidades de la Provincia de Catamarca, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913.

Bs. As., 1/7/2002

VISTO el Expediente Nº 800-000569/2002 del Registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la Ley Nº 22.913, el Decreto Nº 581 del 26 de junio de 1997 y el acta de la reunión de la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA del 20 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de CATAMARCA ha declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, en algunas Localidades de los Departamentos SANTA ROSA, SANTA MARIA, CAPAYAN, VALLE VIEJO y TINOGASTA, afectados por distintos factores climáticos adversos, mediante los Decretos Provinciales Nº 1267 del 18 de diciembre de 2001 y Nº 59 del 23 de enero de 2002.

Que la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA ha analizado la situación ocurrida en la citada provincia y opina que corresponde declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, a fin de la aplicación, en las zonas afectadas, de las medidas previstas en la Ley Nº 22.913 para paliar la situación de los productores y posibilitar la recuperación de las explotaciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que por el artículo 3º, inciso a), apartado 1) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985, se delega en los Señores Ministros de Economía y del Interior la facultad de declaración y cese de emergencias agropecuarias y zonas de desastre.

Por ello,

LOS MINISTROS DE ECONOMIA Y DEL INTERIOR RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913:

a) Declarar en la Provincia de CATAMARCA el estado de desastre agropecuario, en las Localidades de Alijilán, Manantiales, La Tusca- parajes El Quebrachal, El Virqui, La Carpintería y Bella Vista, del Departamento SANTA ROSA, afectados por fuertes precipitaciones y granizo, desde el 13 de noviembre de 2001 hasta el 12 de noviembre de 2002.

b) Declarar en la Provincia de CATAMARCA. el estado de emergencia agropecuaria, en las Localidades La Puntilla, Casa de Piedra, Entre Ríos, Andalhualá y Yapes del Departamento SANTA MARIA, desde el 27 de octubre de 2001 hasta el 26 de octubre de 2002; Colonia del Valle del Departamento CAPAYAN y El Portezuelo, Santa Cruz y Huaycama del Departamento VALLE VIEJO, afectadas por precipitaciones y granizo, desde el 13 de noviembre de 2001 hasta el 12 de noviembre de 2002.

c) Declarar en la Provincia de CATAMARCA el estado de emergencia agropecuaria, en las Localidades de Santa Rosa, Villa San Roque, San José, Barrio Los Robledo y Santo Domingo del Departamento TINOGASTA, por tormenta de granizo que afectara la producción de vid, olivo y cultivos anuales, desde el 13 de enero de 2002 hasta el 12 de enero de 2003.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, conforme con lo establecido en su artículo 8º, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la pro-

vincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la nómina de los certificados emitidos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y provinciales mantendrán informada a la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA sobre las variantes que se registren en las zonas afectadas, a fin de aconsejar la adopción de las disposiciones pertinentes.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Roberto Lavagna. — Jorge R. Matzkin.

Secretaría General y Ministerio de Economía

PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución Conjunta 3/2002 y 109/2002

Adécuanse los Fondos Rotatorios de la Jurisdicción 2000 - Presidencia de la Nación, a los fines de atender los requerimientos de pagos urgentes en los Servicios Administrativos Financieros.

Bs. As., 24/6/2002

Visto el Expediente Nº 14207/02 del registro de esta SECRETARIA GENERAL, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los Decretos Nº 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994, Nº 899 de fecha 11 de diciembre de 1995, la Decisión Administrativa Nº 19 de fecha 27 de marzo de 2002, la Resolución Nº 9 de la Secretaría de Hacienda de fecha 21 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el citado Expediente, se tramita la adecuación de los montos de los Fondos Rotatorios correspondientes a la Jurisdicción 2000 —PRESIDENCIA DE LA NACION—.

Que el Artículo 5º del Decreto Nº 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994, fijó los montos de tales Fondos, en un máximo equivalente al TRES POR CIENTO (3%) de la sumatoria de los créditos presupuestarios originales, para cada ejercicio, estableciendo la Resolución Nº 9 de la Secretaría de Hacienda de fecha 21 de marzo de 2002, que para la constitución de los Fondos Rotatorios, en el ejercicio fiscal 2002, deberá aplicarse sobre los créditos vigentes al día 15 de abril de 2002, correspondientes a los conceptos autorizados en el Artículo 7º de la misma norma legal.

Que el Artículo 6º del mismo Decreto determina que, la creación de los Fondos Rotatorios se autorizará mediante la promulgación de una Resolución Conjunta suscripta, en este caso, por el SECRETARIO GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el MINISTRO de ECONOMIA.

Que el Artículo 1º del Decreto Nº 899 de fecha 11 de diciembre de 1995 autorizó la inclusión de las partidas 1.3.1 y 1.5 en la sumatoria de los créditos presupuestarios, establecidos por el Artículo 7º del Decreto Nº 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994.

Que el Artículo 2º del Decreto mencionado anteriormente faculta a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA, cuando razones fundadas así lo determinen a autorizar el aumento en los fondos rotatorios por sobre el límite establecido en el Decreto Nº 2380/94, los cuales no podrán ser superiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los fondos asignados en virtud de la normativa vigente.

Que la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIEN-

DA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA han tomado la intervención que les compete.

Que en virtud de las facultades otorgadas por el Artículo 6º del Decreto Nº 2380 de fecha 28 de diciembre de 1994, corresponde actuar en consecuencia.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION Y EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVEN:

Artículo 1º — Adecuar los Fondos Rotatorios, hasta la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS (\$ 3.540.600), destinados a atender los gastos correspondientes a las partidas presupuestarias 1.5, 1.3.1 (por aquellos pagos que no revistan el carácter de bonificables), “Bienes de Consumo”, “Servicios no Personales”, “Bienes de Uso” (a excepción de las partidas principales 4.1 y 4.2 y las partidas parciales 4.3.1. y 4.3.2), y “Transferencias”, partida parcial 5.1.4, a los fines de atender los requerimientos de los pagos urgentes en los Servicios Administrativos Financieros de la Jurisdicción 2000 —PRESIDENCIA DE LA NACION—, quedando conformados en la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS (\$ 2.730.700) con Fuente de Financiamiento 11, y PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS (\$ 809.900) con Fuente de Financiamiento 13, totalizando un importe de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS (\$ 3.540.600), según detalle indicado en el Anexo I que es parte integrante de la presente Resolución Conjunta.

Art. 2º — Incrementase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 78/100 (\$ 445.186,78) el monto del Fondo Rotatorio correspondiente al Servicio 301 —PRESIDENCIA DE LA NACION— SECRETARIA GENERAL, constituido en el artículo anterior.

Art. 3º — Habida cuenta que la Dirección General de Administración del MINISTERIO DE ECONOMIA es la dependencia responsable de administrar la ejecución del presupuesto asignado al Servicio Administrativo Financiero (SAF 351), queda bajo su responsabilidad la administración del Fondo Rotatorio que se crea por la presente Resolución Conjunta.

Art. 4º — La percepción, administración y pedido de reintegro de los Fondos Rotatorios asignados por el artículo anterior, estarán a cargo de los Jefes de los Servicios Administrativos Financieros en cada caso.

Art. 5º — La cantidad máxima autorizada para cada gasto individual con cargo a los Fondos Rotatorios que se detallan en el Artículo 1º, será de hasta PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000), a excepción de los pagos de servicios básicos que deberán realizarse, para los que no se observará límite de monto alguno.

Art. 6º — Facúltase a los Secretarios de la Jurisdicción y a los titulares de los Servicios Administrativos Financieros, a asignar los Fondos Rotatorios Internos y las Cajas Chicas, con arreglo a sus necesidades.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. — Roberto Lavagna.

ANEXO I

JURISDICCION: 2000 - PRESIDENCIA DE LA NACION				
S.A.F.	FUENTE FINANC.	DEPENDENCIAS	FONDOS ROTATORIOS	
JURISDICCION 2001				
301	11	SECRETARIA GENERAL	\$	<u>1.824.100,-</u>
JURISDICCION 2011				
303	11	SEC. DE PROG. PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO	\$	<u>193.200,-</u>
JURISDICCION 2013				
318	11	SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR	\$	83.300,-
318	13		\$	<u>35.700,-</u>
			\$	<u>119.000,-</u>

JURISDICCION 2006					
322	11	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES	\$	121.800,-	
322	13		\$	668.500,-	
			\$	790.300,-	
JURISDICCION 2014					
337	11	SECRETARIA DE CULTURA	\$	373.700,-	
337	13	Y COMUNICACION	\$	101.600,-	
			\$	475.300,-	
JURISDICCION 2015					
351	11	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$	134.600,-	
351	13		\$	4.100,-	
			\$	138.700,-	
TOTAL JURISDICCION 2000			\$	3.540.600,-	

Ministerio de Economía
y
Ministerio del Interior

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 140/2002 y 11/2002

Declárase el estado de emergencia y desastre agropecuario a zonas frutihortícolas de diversas localidades de la Provincia de Río Negro, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913.

Bs. As., 1/7/2002

VISTO el Expediente Nº 800-00111912002 del Registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la Ley Nº 22.913, el Decreto Nº 581 del 26 de junio de 1997 y el acta de la reunión de la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA del 20 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de RIO NEGRO ha declarado el estado de emergencia y desastre agropecuario de algunas Localidades de los Departamentos GENERAL ROCA y PICHÍ MAHUIDA, afectadas por tormenta de granizo y heladas tardías, mediante los Decretos Provinciales Nº 62 del 29 de enero de 2002 y Nº 213 del 12 de marzo de 2002.

Que la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA ha analizado la situación ocurrida en la citada provincia y opina que corresponde declarar el estado de emergencia y desastre agropecuario, a fin de la aplicación, en las zonas afectadas, de las medidas previstas en la Ley Nº 22.913 para paliar la situación de los productores y posibilitar la recuperación de las explotaciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que por el artículo 3º, inciso a), apartado 1) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985, se delega en los Señores Ministros de Economía y del Interior la facultad de declaración y cese de emergencias agropecuarias y zonas de desastre.

Por ello,

LOS MINISTROS
DE ECONOMIA
Y
DEL INTERIOR
RESUELVE:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913:

a) Declarar en la Provincia de RIO NEGRO el estado de emergencia y desastre agropecuario a las zonas frutihortícolas de las Localidades de Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Mainqué del Departamento GENERAL ROCA, afectadas por tormentas de granizo, desde el 14 de diciembre de 2001 hasta el 13 de diciembre de 2002.

b) Declarar en la Provincia de RIO NEGRO el estado de emergencia y desastre agropecuario a las zonas frutihortícolas de las Localidades de Allen, Fernández Oro, General Roca y Cipolletti del Departamento GENERAL ROCA y Río Colorado del Departamento PICHÍ MAHUIDA, afecta-

das por heladas tardías, desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 30 de diciembre de 2002.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, conforme con lo establecido en su artículo 8º, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE LA PRODUCCION la nómina de los certificados emitidos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y provinciales mantendrán informada a la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA sobre las variantes que se registren en las zonas afectadas, a fin de aconsejar la adopción de las disposiciones pertinentes.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Roberto Lavagna. — Jorge R. Matzkin.

Ministerio de Economía
y
Ministerio del Interior

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 139/2002 y 10/2002

Declárase el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en diversos departamentos de la Provincia de Córdoba, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913.

Bs. As., 1/7/2002

VISTO el Expediente Nº 800-000639/2002 del Registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la Ley Nº 22.913, el Decreto Nº 581 del 26 de junio de 1997 y el acta de la reunión de la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA del 20 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de CORDOBA ha declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, a los productores afectados por tormentas de granizo de algunas Pedanías de los Departamentos CALAMUCHITA, CAPITAL, COLON, RIO PRIMERO, RIO SEGUNDO, SAN JUSTO, SANTA MARIA, TERCERO ARRIBA, GENERAL SAN MARTIN, TOTORAL y UNION, mediante el Decreto Provincial Nº 2787 del 22 de noviembre de 2001.

Que la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA ha analizado la situación ocurrida en la citada provincia y opina que corresponde declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, a fin de la aplicación, en las zonas afectadas, de las medidas previstas en la Ley Nº 22.913 para paliar la situación de los productores y posibilitar la recuperación de las explotaciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que por el artículo 3º, inciso a), apartado 1) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985, se delega en los Señores Ministros de Economía y del Interior la facultad de declaración y cese de emergencias agropecuarias y zonas de desastre.

Por ello,

LOS MINISTROS
DE ECONOMIA Y
DEL INTERIOR
RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913: Declarar en la provincia de COR-

DOBA el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por tormentas de granizo a las Pedanías Monsalvo y Molinos del Departamento CALAMUCHITA, Departamento CAPITAL, Cañas y Constitución del Departamento COLON; Algodón del Departamento GENERAL SAN MARTIN; Chalacea del Departamento RIO PRIMERO; Oratorio de Peralta, Suburbios, Villa del Rosario, San José, Pilar, Matorrales, Calchín y Arroyo de Alvarez del Departamento RIO SEGUNDO, Libertad, Juárez Celman, Concepción, San Francisco, Arroyito y Sacanta del Departamento SAN JUSTO; Cosme y San Antonio del Departamento SANTA MARIA; Los Zorros del Departamento TERCERO ARRIBA; Candelaria del Departamento TOTORAL y Litin del Departamento UNION, desde el 13 de noviembre de 2001 hasta el 12 de mayo de 2002.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, conforme con lo establecido en su artículo 8º, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la nómina de los certificados emitidos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y provinciales mantendrán informada a la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA sobre las variantes que se registren en las zonas afectadas, a fin de aconsejar la adopción de las disposiciones pertinentes.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Roberto Lavagna. — Jorge R. Matzkin.

Inspección General de Justicia

SISTEMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

Resolución General 9/2002

Contratos bajo la modalidad de “grupos cerrados”. Régimen de diferimientos. Información a la Inspección General de Justicia. Reinscripciones de prendas libres de gastos para los suscriptores. Garantía mínima de las adjudicaciones. Importes percibidos en exceso. Diferimiento. Evolución de la cuotaparte. Intereses punitorios. Eliminación de la multa por renuncia, rescisión o resolución contractual. Derecho al haber de reintegro; oportunidad. Reducción de cargas administrativas. Reconocimiento obligatorio de bonificaciones. Seguros. Derecho del suscriptor a la contratación del seguro. Responsabilidad. Pago parcial de la indemnización. Distribución periódica de importes por multas. Suscriptores morosos. Gestiones de cobranza extrajudicial. Obligatorio de planes de regularización. Ejecución judicial. Facilidades de pago. Evolución y evaluación del régimen. Vigencia.

Bs. As., 4/7/2002

VISTO el dictado de la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 85 y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Nº 366, de fecha 13 de junio de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que con referencia a los contratos de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de “grupos cerrados”, el artículo 2º de la resolución mencionada ha previsto que esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, en el marco de las atribuciones conferidas por las Leyes Nº 11.672 (t.o. 1999) y 22.315, dictará en relación con las operatorias en curso, normas referidas, entre otras cuestiones, al diferimiento del pago de partes de valores o precios, la reducción de cargas administrativas y de otros rubros que integran las cuotapartes y el otorgamiento a los suscriptores de bonificaciones en los precios u otros beneficios.

Que corresponde en consecuencia circunscribirse al marco regulatorio determinado por dicha resolución y reglamentar las materias respectivas.

Que en tal sentido, cabe establecer un régimen de diferimiento de pagos cuya aplicación coadyuve a la posibilidad de la preservación de los contratos en curso en condiciones equitativas y de factible cumplimiento. Dicho régimen habrá de ser de ofrecimiento obligatorio a los suscriptores que ya hubieren recibido el bien-tipo y facultativo para los que se encontraren en período de ahorro; ello, habida cuenta de que en éstos últimos el vínculo contractual puede todavía quedar extinguido por renuncia, rescisión o resolución.

Que en el marco del referido régimen de diferimientos y como consecuencia del mismo, resulta procedente contemplar otros dispositivos orientados igualmente a mejorar las posibilidades de cumplimiento de los contratos en el actual contexto de emergencia.

Que en tal sentido y teniendo en cuenta la eventual insuficiencia de fondos que implica la aplicación de tales diferimientos, cabe exigir que se cumpla con una periodicidad mínima de las adjudicaciones de los bienes a fin de permitir que el sistema continúe funcionando —así sea satisfaciendo un nivel menor de expectativas en orden a la asiduidad en el acceso a los bienes— y prevenir la liquidación anticipada de los grupos de suscriptores.

Que la presente resolución debe también disponer acerca de la aplicación de los importes percibidos en infracción a la Resolución General I.G.J. Nº 1/02, fijando un mecanismo que, sin desmedro de lo dispuesto en ella, atienda a la realidad de la variabilidad del valor de las cuotapartes en función de la evolución del precio del bien-tipo, que es inherente a la operatoria en consideración y conforme a lo determinado por la citada Resolución Conjunta del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 85 y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Nº 366, de fecha 13 de junio de 2002.

Que sin perjuicio del diferimiento que se establece, debe contemplarse la adaptación progresiva de las cuotapartes de los contratos al valor del bien-tipo, en condiciones de suficiente gradualidad que sean compatibles con la subsistencia de las operaciones.

Que la prolongación del plazo de vigencia de los contratos que puede originarse por los diferimientos, no debe traducirse en gastos adicionales para los suscriptores ni importar menoscabo del derecho al oportuno reintegro de sus haberes que asiste a los titulares de contratos extinguidos.

Que resulta asimismo equitativa la temporaria eliminación de la aplicación de las multas a los suscriptores establecidas por el artículo 3º de la Resolución General I.G.J. Nº 8/82 y la reducción, igualmente temporaria, de la carga administrativa que aquellos deben abonar.

Que el dictado de la presente resolución constituye asimismo oportunidad apropiada para retomar el tratamiento de cuestiones consideradas en su momento por las Resoluciones Generales I.G.J. Nº 8/82 y Nº 1/85, ello atendiendo a la experiencia recogida en la aplicación de las mismas y a la necesidad de preservar la equidad de los contratos tanto anteriores como posteriores a la Ley Nº 25.561, en materias sensibles referidas a obligaciones esenciales de los suscriptores.

Que en tal sentido, resulta necesario contemplar para dichos contratos que el precio de los bienes sea el mismo percibido por operaciones de venta efectuadas a la red de comercialización de las empresas fabricantes de los mismos, aplicándose las bonificaciones correspondientes y que en las contrataciones de los seguros sobre los bienes adjudicados, el premio de los mismos se adecue a los percibidos por operaciones ajenas al sistema de ahorro concertadas en el lugar de entrega de los bienes y la cobertura de riesgos exigible se limite a la necesaria para la correcta salvaguarda de los intereses de los grupos de suscriptores, previéndose asimismo la eventualidad de responsabilidades de la entidad administradora en relación con el

pago oportuno o en su caso la falta de pago de la indemnización correspondiente, cuando concurrieren determinadas circunstancias. Sin perjuicio de ello, se aprecia además conducente que, mientras dure la actual emergencia, los suscriptores adjudicados cuenten con la posibilidad de optar por la contratación directa del seguro al margen de lo previsto por el artículo 8° de la Resolución General I.G.J. N° 8/82 —cuyo texto se modifica—, asumiendo en tal caso ellos y sus garantes las responsabilidades consiguientes.

Que con respecto al derecho de los suscriptores adjudicados sobre los fondos resultantes de la aplicación de multas por extinción de contratos, resulta pertinente procurar su tutela estableciendo la oportunidad de su puesta a disposición y la publicidad de la misma.

Que por último, resulta procedente establecer previsiones dirigidas a la exención de determinados gastos de cobranza extrajudicial y a facilitar la posibilidad de la cancelación de saldos de deuda en aquellos casos en los que se haya debido proceder a la ejecución judicial del bien-tipo prendado. En orden a lo primero, cabe considerar que dicha cobranza extrajudicial constituye una actividad propia de la administración del sistema; en tanto que con el otorgamiento obligatorio de facilidades de pago por el saldo remanente luego de realizado el bien gravado —ello durante el lapso de la emergencia considerado por la Ley N° 25.561—, ha de procurarse mitigar en alguna medida la posibilidad de una mayor afectación patrimonial del suscriptor y sus garantes.

Que la presente resolución se dicta de conformidad con la competencia administrativa de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y su contenido contempla las materias previstas por la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 85 y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 366, de fecha 13 de junio de 2002.

Que en la interpretación de sus disposiciones debe atenderse a la finalidad que las inspira, es decir, la protección de intereses generales y la tutela de la fe pública comprometidos en la continuidad y el regular funcionamiento del sistema de ahorro para fines determinados; ello, dentro del contexto de la actual emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, cuyas características y excepcionales alcances tornan asimismo prudente que esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA atienda a su evolución, evaluando el régimen de diferimientos y los restantes dispositivos que se adoptan, con vistas a su reconsideración, revisión o sustitución en caso de resultar ello pertinente.

Que los límites de la competencia de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA se orientan a la reglamentación del funcionamiento del sistema de ahorro para fines determinados como tal y por lo tanto a su preservación, ajustando al marco de la presente emergencia el ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 9° de la Ley N° 22.315 y 6° de la Ley N° 11.672 —t.o. 1999—.

Que el Departamento Control Federal de Ahorro ha tomado la intervención que le cabe. Asimismo, las disposiciones de la presente fueron evaluadas favorablemente por otros organismos vinculados con la defensa de la competencia y del consumidor y áreas específicas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y del MINISTERIO DE ECONOMIA, realizándose plurales reuniones con sectores de la industria automotriz y de asociaciones de consumidores, en cuya oportunidad fueron expuestos los principios generales de la normativa reglamentaria que se dicta.

Por ello y lo dispuesto en los artículos 6° de la Ley N° 11.672 (t.o. 1999) y 9° de la Ley N° 22.315,

EL INSPECTOR
GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Régimen de diferimientos.

Artículo 1° — Las entidades administradoras de planes de ahorro bajo la modalidad de “grupos

cerrados”, deberán ofrecer a los suscriptores adjudicatarios titulares de contratos celebrados con anterioridad a la Ley N° 25.561, el diferimiento del pago de un porcentaje de las cuotapartes emitidas y que se emitan a partir de la vigencia de la mencionada ley. El ofrecimiento del mismo a los suscriptores en período de ahorro, tendrá carácter facultativo.

La implementación del diferimiento deberá efectuarse a partir de la emisión de la primer cuotaparte siguiente a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución.

Los porcentajes no abonados oportunamente en virtud del diferimiento, serán cancelados en cuotas suplementarias una vez cumplido el plazo de vigencia del grupo de suscriptores.

Los talones de pago discriminarán el monto total de la cuotaparte y el que corresponda deducido el porcentaje diferido, precisándose el porcentaje de valor del bien-tipo que quedará cancelado con ese pago parcial. Los suscriptores conservarán siempre la facultad de abonar el total al vencimiento de la cuotaparte. Tendrán también la facultad de tener por cancelados los porcentajes de valor móvil pagados desde la vigencia de la Resolución General I.G.J. N° 1/02, renunciando a las compensaciones o acreditaciones previstas por el artículo 5°, primer párrafo, de la presente resolución. Esta decisión deberá ser notificada a la entidad administradora por medio fehaciente.

Las ofertas de licitación y cancelaciones anticipadas deberán efectuarse conforme al valor del bien-tipo a la fecha de recepción de las mismas. Las cancelaciones anticipadas se imputarán a porcentajes diferidos de cuotapartes anteriores, si los hubiere, comenzando por la más antigua de dichas cuotapartes y de conformidad con el valor móvil de las mismas.

Información a la Inspección General de Justicia.

Art. 2° — Dentro de los quince (15) días hábiles de la vigencia de esta resolución, las entidades administradoras deberán informar a esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA:

1) El estado de cada grupo, discriminado por suscriptores en período de ahorro y de amortización y suscriptores cuyos contratos se han extinguido por renuncia, rescisión o resolución;

2) La forma en que aplicarán el régimen de diferimientos establecido en el artículo anterior.

La información prevista en el inciso 1) se actualizará bimensualmente.

Reinscripciones de prendas libres de gastos para los suscriptores.

Art. 3° — Las inscripciones de modificaciones de contratos prendarios o la reinscripción de los mismos que fueren necesarias como consecuencia de la aplicación del régimen de diferimientos, se harán sin cargo alguno para el suscriptor adjudicado.

Garantía mínima de las adjudicaciones.

Art. 4° — Las entidades administradoras deberán adelantar los fondos necesarios u obtener la financiación de los mismos, sin costo alguno para los suscriptores, en todos los casos en que los diferimientos efectuados afectaren la disponibilidad de los fondos necesarios para las adjudicaciones previstas en las condiciones generales de contratación; ello, a los efectos de garantizar las adjudicaciones mínimas periódicas y de evitar la liquidación anticipada de los grupos.

Importes percibidos en exceso. Diferimiento. Evolución de la cuotaparte. Intereses punitorios.

Art. 5° — Los porcentajes que, por infracción al artículo 2° de la Resolución General I.G.J. N° 1/02, fueron percibidos entre el mes de enero de 2001 y la vigencia de esta resolución en concepto de cuota pura y carga administrativa, en exceso del monto de la cuota vencida en el mes de diciembre de 2001, serán compensados o acreditados a favor de los suscriptores, en cuotapartes mensuales emitidas a partir de la vigencia de la presente resolución.

La compensación o acreditación deberá ser practicada por las entidades administradoras de modo tal que:

1) El porcentaje que el monto percibido en exceso haya representado en relación con el valor

móvil del bien-tipo al mes de diciembre de 2001, sea igual respecto al valor móvil vigente a la fecha de cada acreditación o compensación;

2) El monto de la cuota a abonar por el suscriptor, durante dicha compensación o acreditación, no sea inferior al de la cuotaparte vigente al mes de diciembre de 2001.

Los porcentajes de valor móvil resultantes de la diferencia entre la cuota pura emitida conforme al precio del bien-tipo vigente en cada mes y aquella que resulte de la compensación o acreditación practicada, se diferirán en las cuotas suplementarias contempladas por el artículo 1° de la presente resolución.

Sin perjuicio de los diferimientos que se establezcan, la cuotaparte alcanzará en el mes de diciembre de 2003, en forma progresiva creciente, el nivel de valor que corresponda al precio vigente del bien-tipo para dicho mes. En su evolución progresiva, al 31 de diciembre de 2002 la cuotaparte no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%) el valor que tenía al mes de diciembre de 2001.

Los pagos realizados en término conforme al valor de la cuotaparte vigente al mes de diciembre de 2001, no darán lugar a la aplicación de intereses punitorios sobre la diferencia entre dicho valor y el de la cuotaparte emitida por la entidad administradora. En el supuesto de que ésta ya hubiere percibido tales intereses, los mismos deberán integrar la compensación o acreditación contemplada en el primer párrafo de este artículo.

Eliminación de la multa por renuncia, rescisión o resolución contractual.

Art. 6° — Déjase sin efecto hasta el 31 de diciembre de 2003, la penalidad al suscriptor por renuncia, rescisión o resolución del contrato, prevista en el artículo 3° de la Resolución General I.G.J. N° 8 del 30 de diciembre de 1982, respecto de aquellos contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 25.561.

Derecho al haber de reintegro; oportunidad.

Art. 7° — Los diferimientos de cuotapartes que extiendan el plazo previsto en cada contrato, no afectarán el derecho de los suscriptores titulares de contratos extinguidos antes de la entrada en vigor de esta resolución, a percibir sus haberes de reintegro dentro de los treinta (30) días corridos del vencimiento del plazo originario de vigencia del grupo al cual pertenecieran, deducidos en esa oportunidad los faltantes por morosidad que pudieren constatare en cada grupo y en su caso los que sean consecuencia de la aplicación de los planes de facilidades de pago previstos en los artículos 13 y 14.

Reducción de cargas administrativas.

Art. 8° — Las cargas administrativas serán calculadas sobre el monto efectivamente pagado conforme a la discriminación del mismo consignada en los talones de las cuotapartes, contemplada en el artículo 1°.

El monto resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se reducirá en un cuarenta por ciento (40%) para las cuotapartes correspondientes al período comprendido entre el mes inmediato siguiente al de la vigencia de la presente resolución y el mes de agosto de 2003, ambos meses inclusive.

Sin perjuicio de ello, las entidades administradoras podrán solicitar durante el lapso indicado la revisión de la reducción dispuesta, acreditando fehacientemente la insuficiencia de la carga administrativa para solventar sus costos ordinarios de administración.

Reconocimiento obligatorio de bonificaciones.

Art. 9° — A partir de la vigencia de la presente resolución, en los planes de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de “grupos cerrados”, el precio de los bienes que se adjudiquen será equivalente al precio que la empresa fabricante de los mismos perciba por operaciones de venta a su red de comercialización. Toda bonificación o descuento practicados en estas últimas, deberá trasladarse, en las mejores condiciones de su otorgamiento, al precio del bien-tipo a los fines de la determinación de la cuota pura.

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, dentro de los diez (10) días corridos de la vigencia de esta resolución,

las entidades administradoras deberán presentar en sus expedientes de bases técnicas, un compromiso expreso en el sentido indicado, asumido por las empresas fabricantes de los bienes, el que deberá estar suscripto por el representante legal de éstas últimas.

Mensualmente las entidades administradoras deberán incluir las bonificaciones a que se refiere este artículo en las listas de precios que presenten a los fines de la Resolución General I.G.J. N° 4/91.

Seguros.

Art. 10. — Modifícase el artículo 8° de la Resolución General I.G.J. N° 8/82, el que quedará re-dactado en los términos siguientes:

“Las entidades administradoras proporcionarán a los suscriptores una lista de por lo menos cinco (5) compañías aseguradoras de plaza, para que cada uno de ellos elija libremente aquella con la que habrá de contratarse el seguro del bien adjudicado y sus renovaciones.

“El premio del seguro deberá ser el mismo que la compañía elegida perciba por operaciones con particulares, ajenas al sistema de ahorro, concertadas en el lugar de entrega del bien-tipo.

“En ningún caso podrá exigirse que el seguro cubra riesgos cuyo resarcimiento no produzca el ingreso de fondos al grupo.

“Las entidades administradoras deberán informar en sus expedientes de bases técnicas, la nómina de compañías ofrecidas y su tabla tarifaria y acompañar copia de la póliza de cada compañía aseguradora que contenga la cobertura referida en el párrafo anterior. Deberán actualizar dichos recaudos dentro de los diez (10) días hábiles de producida cualquier modificación.

“La gestión del cobro de la indemnización estará a cargo de la entidad administradora, quien deberá observar la diligencia necesaria para percibirla dentro de los plazos legales y contractuales. Si el pago se hiciere con posterioridad, la diferencia entre lo percibido y lo que habría correspondido si se efectuaba en término, estará a cargo de la entidad administradora, quien deberá aportarla al grupo, salvo culpa del suscriptor.

“La entidad administradora responderá ante el grupo con fondos propios por la falta de pago oportuno de la indemnización, causada en la quiebra o liquidación de la compañía aseguradora, si al tiempo de ser ella elegida por el suscriptor, se hallaba bajo investigación administrativa de autoridad competente y ésta hubiere determinado posteriormente que las causas de la insolvencia de la entidad ya existían cuando el suscriptor efectuó su elección.”

Derecho del suscriptor a la contratación del seguro. Responsabilidad. Pago parcial de la indemnización.

Art. 11. — Durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de esta resolución y el 31 de diciembre de 2003, los suscriptores adjudicados podrán optar por la contratación del seguro sobre el bien en las condiciones previstas en el artículo 8° de la Resolución General I.G.J. N° 8/82 o por la contratación directa del mismo con cualquier compañía aseguradora de plaza. Igual opción se aplicará a sus renovaciones. La póliza deberá ser endosada a favor de la entidad administradora.

La falta de cobertura, la insuficiencia de la misma o la del monto asegurado o, en su caso, la falta de pago de la indemnización, cualquiera sea su causa, obligarán solidariamente al suscriptor y sus codeudores frente al grupo, sin perjuicio de sus eventuales derechos contra la entidad aseguradora.

Si la indemnización se pagare parcialmente, se aplicará el régimen de las cancelaciones anticipadas de cuotas.

Distribución periódica de importes por multas.

Art. 12. —Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 9° de la Resolución General I.G.J. N° 8/82, los importes obtenidos por aplicación de las multas previstas en el artículo 3° de dicha resolución, deberán ser puestos a disposición de los suscriptores adjudicados dentro de los diez (10) días corridos de su deducción, comunicándolo por medio de la publicación prevista en la Resolución General I.G.J. N° 2/94 y sus modificatorias.

Suscriptores morosos. Gestiones de cobranza extrajudicial. Obligatoriedad de planes de regularización.

Art. 13. — Durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley Nº 25.561 y el 31 de diciembre de 2003, las gestiones de cobro extrajudicial se limitarán a las cuotapartes efectivamente adeudadas. Serán sin costo para el suscriptor —salvo gastos de envío de comunicaciones o intimaciones—, si la deuda del mismo no fuere superior a seis (6) cuotapartes, consecutivas o alternadas.

Será obligatorio para la entidad administradora ofrecer al suscriptor moroso la posibilidad de regularizar su situación, mediante el pago de cuotas cuyo importe no exceda del menor que abonaren aquellos suscriptores que en el mismo grupo se acogieron al régimen de diferimiento contemplado en el artículo 1º de esta resolución.

Ejecución judicial. Facilidades de pago.

Art. 14. — Si se ejecutare judicialmente el bien-tipo por mora operada durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de esta resolución y el 31 de diciembre de 2003, la entidad administradora deberá ofrecer al suscriptor y sus garantes un plan de facilidades de pago del saldo de deuda luego de imputado el producido de la subasta del bien.

Salvo conformidad de los obligados manifestada en el respectivo convenio, será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior.

Evolución y evaluación del régimen.

Art. 15. — En el contexto de la emergencia pública declarada por la Ley Nº 25.561 y demás normativa dictada en su consecuencia, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA evaluará prudentialmente el funcionamiento del sistema de ahorro para fines determinados y la evolución y efectos del régimen que por la presente resolución se establece; ello, a los fines de disponer, en su caso, modificaciones al mismo, comprendida la fijación de nuevos plazos o de promover otras medidas que pudieren corresponder, en cuanto las mismas fueren de la competencia de otros órganos o poderes del Estado Nacional.

Vigencia.

Art. 16. — Esta resolución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 17. — Regístrese como Resolución General. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Publíquese. Oportunamente archívese. — Guillermo E. Ragazzi.

Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 1310

Impuesto al Valor Agregado. Resolución General Nº 18, sus modificatorias y complementarias. Resolución General Nº 39 y sus modificaciones. Nómina de sujetos comprendidos.

Bs. As., 3/7/2002

VISTO el régimen de retención del impuesto al valor agregado establecido por la Resolución General Nº 18, sus modificatorias y complementarias, y la Resolución General Nº 39 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2º y 3º de la norma citada en primer término, esta Administración Federal está facultada para incorporar nuevos agentes de retención al mencionado régimen, así como para excluir aquéllos que fueron designados como tales.

Que, en consecuencia, corresponde informar la identificación de los sujetos que se incorporan a este régimen de retención y de los que han quedado excluidos del mismo.

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección de Legislación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618, de fecha 10 de julio de 1997 y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS RESUELVE:

Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 1309

Procedimiento. Sistema de acreditación de inscripción. Nueva “Constancia de Inscripción” y “Credencial Fiscal”. Plazo especial. Resolución General Nº 663 y sus modificaciones. Su modificación.

Bs. As., 3/7/2002

VISTO la Resolución General Nº 663 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la norma del visto se instrumentó un sistema de acreditación de inscripción para todo el universo de contribuyentes y/o responsables, a fin de exteriorizar la condición de inscritos en los distintos tributos y/o regímenes a cargo de este organismo.

Que razones operativas y de administración tributaria hacen aconsejable extender la vigencia de los certificados y las constancias de inscripción actualmente en uso, respecto de las personas físicas y sucesiones indivisas.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación y de Programas y Normas de Recaudación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618 de fecha 10 de julio de 1997 y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS RESUELVE:

Artículo 1º — Modifícase la Resolución General Nº 663 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:

- Sustitúyese en el artículo 9º la expresión “30 de junio de 2002, inclusive” por la expresión “31 de diciembre de 2002, inclusive”.

Art. 2º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.

Artículo 1º — Modifícase el Anexo I de la Resolución General Nº 18, sus modificatorias y complementarias —texto según Anexo I de la Resolución General Nº 875—, en la forma que se indica seguidamente:

1. Incorpóranse a los responsables que se detallan a continuación:

“30-51436157-2	AVICOLA CAPITAN SARMIENTO S.A.
30-57888556-7	DELASOIE Y EGGS SOCIEDAD ANONIMA
30-51662138-5	FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS S A C I A F I I C M
30-51439200-1	LAS CAMELIAS S A
20-07560991-5	MAIONCHI ROBERTO LUIS
30-67090482-9	OHAKY SRL
30-56976946-5	PROSAVIC SRL
30-59753238-1	SANCHEZ Y SANCHEZ S R L
30-50900992-5	SANTIAGO EICHHORN E HIJOS SRL
30-50481998-8	SUPER S A SOC URUGUAYENSE DE PRODUCTORES DE ENTRE RIOS SOC ANON”

2. Elimínanse a los responsables que se indican a continuación:

“30-52159286-5	HIPERMERCADO TIGRE SA
30-51564236-2	INDACOR S.A.
30-50612486-3	TRINTER S A C I Y F”

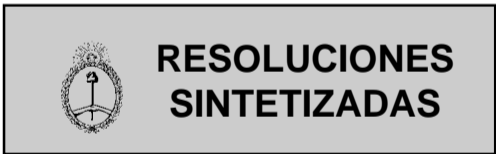
Art. 2º — Modifícase el Anexo de la Resolución General Nº 39 y sus modificaciones —texto según Anexo II de la Resolución General Nº 875—, en la forma que se indica seguidamente:

1. Incorpórase al responsable que se detalla a continuación:

“33-58776070-9	ETA S A EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA”
----------------	--

Art. 3º — Lo establecido en los artículos precedentes tendrá efectos a partir del día 1 de agosto de 2002, inclusive.

Art. 4º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 451/2002-MTESS

Bs. As., 27/6/2002

Apruébase la adecuación efectuada por el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE POSADAS, en el texto del Estatuto Social obrante de fojas 315 a fojas 347 del Expediente Nº 72.820/83 de conformidad con lo dispuesto por la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario Nº 467/88.

Resolución 452/2002-MTESS

Bs. As., 27/6/2002

Apruébase la modificación parcial efectuada por la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, en el Estatuto Social obrante de fojas 3 a fojas 135 del Trámite Interno Nº 567.613/02 agregado a fojas 95 del Expediente Nº 1.034.469/00, respecto a los artículos 4, 8, 11, 12, 16 inc. b) y 42. Los mencionados artículos pasarán a formar parte del texto del Estatuto que fuera aprobado por Resolución Nº 223 de fecha 19 de marzo de 1996.

Resolución 453/2002-MTESS

Bs. As., 27/6/2002

Apruébase la modificación parcial efectuada por el SINDICATO DEL PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL - 19º DISTRITO, en el texto del Estatuto Social obrante de fojas a 100 del Expediente Nº 1.055.887/02 agregado a fojas 214 del expediente Nº 161.428/01 en relación a los artículos 3, 6, 14, 16, 17, 21, 29, 30, 31, se derogan los anteriores artículos 32 y 33 produciéndose en consecuencia un corrimiento del resto de las normas, 32 (anterior 34), 33 (anterior 35), 34 (anterior 36), 35 (anterior 37), 36 (anterior 38), 43 (anterior 45), 44 (anterior 46), 51 (anterior 53), 52 (anterior 54), 53 (anterior 55) y 74 (anterior 76). Los mencionados artículos pasarán a formar parte del texto del estatuto que fuera aprobado por Resolución M.T. y S.S. Nº 764 de fecha 24 de setiembre de 1991. Ello no implica modificar los ámbitos de representación personal y territorial reconocidos a la entidad por esta Autoridad de Aplicación mediante Resolución M.T. y S.S. Nº 764 de fecha 24 de setiembre de 1991.

Resolución 454/2002-MTESS

Bs. As., 27/6/2002

Apruébase la adecuación del texto del Estatuto Social de la UNION DOCENTES AGREMIADOS PROVINCIALES (UDAP), obrante de fojas 36 a fojas 71 del Trámite Interno Nº 1053/94, a las disposiciones de la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario Nº 467/88. Ello no implica modificar los alcances de la Personería Gremial que le fuera otorgada a la entidad mediante Resolución Nº 378 de fecha 5 de diciembre de 1975.



DISPOSICIONES

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO

Disposición 2419/2002

Clausúrase la Droguería Florida S.R.L. como distribuidor de productos para diagnóstico de uso in vitro.

Bs. As., 27/5/2002

VISTO el expediente n° 1-47-1110-987-01-9 del registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados el Instituto Nacional de Medicamentos informa sobre los procedimientos llevados a cabo en los establecimientos Productos Roche S.A.Q. e I., Distribuidora Rofina S.A.I.C.F., Droguería Florida S.R.L. y en Cervind Pack S.R.L., con relación al producto para diagnóstico uso in vitro clasificado como de Autoevaluación denominado EVATEST T, lote T1005001.

Que en particular, refiere que se encontraron unidades del test de embarazo EVATEST T Lote T1005001 —producto de autoevaluación— expuestas en la góndola de artículos de perfumería junto a medicamentos de venta libre en el local del Supermercado NORTE sito en Scalabrini Ortiz 3128 de la Ciudad de Buenos Aires, en un pack de plástico con una etiqueta en la que se encontraba la figura de una palmera, la palabra Florida y una leyenda que indicaba: “Al cuidado de su Salud - Venta libre autorizada por Decreto 2284/91”, procediéndose en esa oportunidad a la compra de una unidad.

Que como consecuencia se efectuó una inspección en las instalaciones de la División Diagnóstica de Productos Roche S.A.Q. e I., sita en Cabrera 6053/55, por ser la firma titular del producto, con fecha 15 de febrero de 2001, con el objeto de investigar documentación, en el transcurso de la cual la Codirectora Técnica reconoció la unidad exhibida como propia, a excepción del pack de PVC en el que se encontraba envasada y de la etiqueta con la palmera y la leyenda transcrita en el considerando precedente.

Que en dicho procedimiento los inspectores verificaron que el acondicionamiento y distribución primaria de productos para autoevaluación se realiza a través de Productos Roche S.A.Q. e I. de la localidad de Olivos, siendo su único cliente la Distribuidora Rofina S.A.I.C.F.; que asimismo el responsable de logística de la empresa presentó el listado de clientes de Rofina y copia del registro de comercialización del lote de Evatest T en cuestión, manifestando que tanto la palmera como la leyenda Florida pertenecía a Droguería Florida S.R.L., constatándose que del listado presentado la Droguería Florida S.R.L. es uno de los clientes de Rofina.

Que con fecha 16 de febrero de 2001 se inspeccionó la firma Rofina S.A.I.C.F., verificándose que ésta había vendido a Droguería Florida S.R.L. el lote T1005001 del producto EVATEST T.

Que luego de recabar la información correcta sobre el domicilio de la Droguería Florida S.R.L., se efectuó la inspección el día 23 de febrero de 2001, verificándose durante la misma que no poseía habilitación como distribuidor de productos para diagnóstico de uso in vitro; que distribuía y comercializaba productos para diagnóstico de uso in vitro, en particular el producto de autoevaluación EVATEST T; que dicha distribución se efectuaba en diversos supermercados que se identifican a fs. 3, no encontrándose autorizada la venta en dichos locales; que Droguería Florida S.R.L., por su cuenta y riesgo colocaba este

producto en un envase de PVC y etiquetaba el mismo con un rótulo con el dibujo de una palmera y la leyenda “al cuidado de la salud - Venta libre autorizada por Decreto 2284/91”, tercerizando esta operación en el establecimiento Cervind Pack S.R.L. sito en Lavalle 2215, localidad de Villa Maipú, Pcia. de Bs. As.

Que luego se inspecciona el establecimiento de la firma CERVIND PACK S.R.L. el día 27 de febrero de 2001, constatándose que esta empresa no poseía una solicitud de habilitación municipal, no contando con las habilitaciones de la Autoridad Sanitaria Provincial o Nacional, verificándose asimismo que en dicho local se realizaba el sobreempaque de medicamentos y reactivos de diagnósticos enviados por la Droguería Florida S.R.L.

Que por todo lo expuesto, el Instituto Nacional de Medicamentos aconseja: A. — Clausurar la Droguería Florida S.R.L. como distribuidor de productos para diagnóstico de uso in vitro: por no estar habilitada para tal fin; por haber distribuido y comercializado el producto EVATEST T incluyéndolo en un envase cuaternario y etiquetado por su cuenta y riesgo con una leyenda que indicaba venta autorizada por Decreto n° 2284/91; por haber cmercializado y distribuido el aludido producto a supermercados no encontrándose autorizada la comercialización en dichos locales; B. — Ordenar a Droguería Florida S.R.L. a realizar el recupero de todas las unidades de todos los productos para diagnóstico de uso in vitro y de autoevaluación distribuidos y comercializados, debiendo remitir al INAME copia de la nota que enviará a los clientes, listados total de clientes, copias de recibo de notificación por los clientes e informe de conciliación final una vez finalizado el mismo, debiendo posteriormente realizar la destrucción de todas las unidades comunicando al INAME la fecha, lugar y hora de la destrucción, a efectos de que los inspectores se hagan presentes; C. — Ordenar la destrucción de todas las unidades encontradas en los depósitos de la Droguería Florida S.R.L. del producto EVATEST T, debiendo comunicar al INAME la fecha, lugar y hora de la destrucción, a efectos de que los inspectores se hagan presentes; D. — Iniciar los sumarios correspondientes.

Que la Resolución ex M.S. y A.S. n° 145/98 regula las actividades relacionadas con los productos para diagnóstico e investigación de uso “in vitro”, otorgando a la A.N.M.A.T. la facultad para dictar las normas reglamentarias.

Que en tal sentido se dictaron las Disposiciones A.N.M.A.T. n° 2674/99, n° 2084/99, n° 2676/99.

Que de acuerdo al artículo 2° de la Disposición A.N.M.A.T. n° 2084/99 se considera distribuidor a toda persona física o jurídica que efectúa la distribución de productos para diagnóstico e investigación de uso “in vitro” desde el lugar de elaboración, fraccionamiento y/o importación, hasta el usuario final u otro distribuidor habilitado para tal fin.

Que en particular la firma Rofina S.A.I.C.F. de acuerdo a las constancias obrantes en estos actuados vendió a la firma DROGUERIA FLORIDA S.R.L. el producto EVATEST T, Lote n° T 1005001, no estando esta última habilitada para tal fin, por lo que presuntamente habría infringido la aludida normativa, como así también el artículo 4° de la Resolución ex M.S. y A.S. n° 145/98 u otras normas que surjan como consecuencia de la investigación que se realice.

Que con respecto a la firma CERVIND PACK S.R.L. correspondería inhibirla para efectuar etapas de elaboración de medicamentos y reactivos de diagnóstico, iniciar un sumario por presunta infracción del artículo 3° y 4° de la Resolución ex M.S. y A.S. n° 145/98, la Disposición A.N.M.A.T. n° 2676/99, u otras normas que surjan como consecuencia de la investigación que se realice, e informar a las autoridades municipales de Gral. San Martín, a los fines de que tome conocimiento de las medidas adoptadas y disponga las que considere oportunas en el ámbito de su competencia.

Que con relación a la DROGUERIA FLORIDA S.R.L., además de las medidas aconsejadas por el INAME, correspondería iniciar un sumario administrativo por presunto incum-

plimiento de la Resolución ex M.S. y A.S. N° 145/98, artículos 3° y 4° la Disposición A.N.M.A.T. n° 2084/99, artículo 3° u otra norma que surja como consecuencia de la investigación que se realice, como así también poner en conocimiento de la Dirección de Registro y Fiscalización de Recursos de Salud el procedimiento llevado a cabo en dicho establecimiento y las medidas adoptadas por esta Administración, a los fines de que tome los recaudos que considere oportunos en el ámbito de su competencia

Que desde el punto de vista legal las medidas propuestas se consideran adecuadas, teniendo en cuenta para ello las facultades con que cuenta esta Administración Nacional en virtud del Decreto n° 1490/92, artículo 8°, inc. f) y artículo 10, inc. s).

Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto n° 1490/92 y el Decreto n° 197/02.

Por ello,

EL INTERVENTOR
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Clausúrase la Droguería Florida S.R.L. como distribuidor de productos para diagnóstico de uso in vitro.

Art. 2° — Ordénase a la Droguería Florida S.R.L. a realizar el recupero de todas las unidades de todos los productos para diagnóstico de uso in vitro y de autoevaluación distribuidos y comercializados, debiendo remitir al INAME copia de la nota que enviará a los clientes, listados total de clientes, copias de recibo de notificación por los clientes e informe de conciliación final una vez finalizado el mismo, debiendo posteriormente realizar la destrucción de todas las unidades comunicando al INAME la fecha, lugar y hora de la destrucción, a efectos de que los inspectores se hagan presentes.

Art. 3° — Ordénase la destrucción de todas las unidades encontradas en los depósitos de la Droguería Florida S.R.L. del producto EVATEST T, debiendo comunicar al INAME la fecha, lugar y hora de la destrucción, a efectos de que los inspectores se hagan presentes.

Art. 4° — Instrúyase sumario a la firma DROGUERIA FLORIDA S.R.L. y/o a quien resulte ser su Director Técnico por presunto incumplimiento de la Resolución ex M.S. y A.S. N° 145/98, artículos 3° y 4° y de la Disposición A.N.M.A.T. N° 2084/99, artículo 3° y/u otra norma que surja como consecuencia de la investigación que se ordena por la presente.

Art. 5° — Instrúyase sumario a la firma ROFINA S.A.I.C.F. y/o quien resulte ser su Director Técnico y/o quien resulte responsable por presunto incumplimiento del artículo 4° de la Resolución ex M.S. y A.S. n° 145/98 y del artículo 2° de la Disposición A.N.M.A.T. n° 2084/99 u otras normas que surjan como consecuencia de la investigación que se ordena por la presente, por los fundamentos expuestos en los considerandos.

Art. 6° — Inhíbese a la firma CERVIND PACK S.R.L. para efectuar etapas de elaboración de medicamentos y de productos de diagnóstico e investigación de uso “in vitro”.

Art. 7° — Instrúyase sumario a la firma CERVIND PACK S.R.L. y/o quien resulte ser su Director Técnico por presunta infracción del artículo 3° y 4° de la Resolución ex M.S. y A.S. n° 145/98, la Disposición A.N.M.A.T. n° 2676/99, u otras normas que surjan como consecuencia de la investigación que se realice.

Art. 8° — Comuníquese a la Municipalidad de Gral. San Martín y a la Dirección de Registro y Fiscalización de Recursos de Salud del Ministerio de Salud el procedimiento y medidas adoptadas por la presente Disposición, a los fines de que tomen conocimiento y adopten las medidas que consideren oportunas dentro del ámbito de su competencia.

Art. 9° — Regístrese, comuníquese a quienes corresponda. Dése al Departamento de Registro

a sus efectos. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, gírese al Departamento de Sumarios para la continuación del trámite. — Manuel R. Limeres.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición 3059/2002

Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional del producto rotulado como Piroxicam 20 mg, por 60 comprimidos, lote 0355702, vto. 03/2004, Laboratorio Baden.

Bs. As., 27/6/2002

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-1001-02-1 del Registro de esta Administración Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, el Instituto Nacional de Medicamentos por Orden de Inspección N° 17.928 procedió a inspeccionar al establecimiento “Farmacia Natal II” sito en la calle Granaderos esquina Sáenz Peña, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.

Que en el nombrado establecimiento se encontraron unidades del producto rotulado como PIROXICAM 20 mg, por 60 comprimidos, lote 0355702, vto. 03/2004, LABORATORIO BADEN - calle Nueva N° 5374, Conchali, Santiago.

Que a fs. 2 se agrega el informe producido por el Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos del INAME, se trataría de un producto que no posee certificado de autorización para ser comercializado en el ámbito del territorio nacional. Asimismo se indica que la firma LABORATORIO BADEN no se encuentra habilitada por esta Administración Nacional.

Que lo actuado por el INAME se enmarca dentro de lo autorizado por el Art. 13 de la Ley N° 16.463, resultando competente la ANMAT en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92 art. 10 inc. q).

Que en los términos previstos por el Decreto N° 1490/92 en su art. 10 inc. s) resulta necesario disponer la prohibición de comercialización en todo el país del producto objeto del presente.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 197/02.

Por ello;

EL INTERVENTOR
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional del producto rotulado como PIROXICAM 20 mg, por 60 comprimidos, lote 0355702, vto. 03/2004, LABORATORIO BADEN - calle Nueva N° 5374, Conchali, Santiago.

Art. 2° — Gírese copia certificada de las presentes actuaciones al Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza para que tome la intervención de su competencia, en punto a determinar la responsabilidad que pudiera corresponder a los establecimientos inspeccionados.

Art. 3° — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, comuníquese a las autoridades provinciales y a las del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a CAEME, CILFA, CAPEMVel, COOPERALA, FACAFA, CAPGEN, CAPROFAC y a la COFA. Dése copia al Departamento de Relaciones Institucionales. Cumplido, pase al Departamento de Asuntos Judiciales para que por su intermedio se giren las copias que se mencionan en los Artículos anteriores mediante atenta nota de estilo. Cumplido, archívese. — Manuel R. Limeres.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

ESPECIALIDADES MEDICINALES

Disposición 3061/2002

Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de productos rotulados como Novalgina Jarabe, Laboratorio Hoechst Marion Roussell.

Bs. As., 27/6/2002

VISTO el Expediente Nº 1-47-1110-2642-01-9 de esta Administración Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que mediante los presentes actuados el Instituto Nacional de Medicamentos constató, a través del procedimiento pertinente, la existencia de unidades apócrifas de los productos rotulados como NOVALGINA Jarabe x 100 ml, Lote 1C992, Vto. 09/2002, LABORATORIO HOECHST MARION ROUSSELL y NOVALGINA Jarabe x 100 ml. Lote 1H092, Vto. 08/2003, LABORATORIO HOECHST MARION ROUSSELL.

Que la Dependencia aludida informa a fs. 1, de los presentes, que a través de las Ordenes de Inspección Nros. 15764/01, 16025/01 y 16022, se retiraron muestras de dichos productos, en los establecimientos: Autoservicio Super Impacto, Despensa Los Amigos y Autoservicio Los Mellizos, todos ubicados en la ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa.

Que asimismo, mediante Orden de Inspección Nº 1524/01, se exhibieron dichas muestras al director técnico de la firma Aventis Pharma S.A., titular de los registros pertenecientes a los productos mencionados, quien manifiesta que los mismos no se comercializan en el país.

Que lo actuado por el Instituto Nacional de Medicamentos se enmarca dentro de lo autorizado por el Artículo 13 de la Ley 16.463, resultando competente la ANMAT, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1490/92, Artículo 10º, inc. q).

Que de acuerdo a lo preceptuado por el Decreto Nº 1490/92 en su art. 8 inc. ñ), resulta necesario disponer la prohibición de comercialización en todo el país de los lotes precedentemente mencionados.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1490/92 y 197/02.

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA DISPONE:

Artículo 1º — Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de los productos rotulados como NOVALGINA Jarabe x 100 ml, Lote 1C992, Vto. 09/2002, LABORATORIO HOECHST MARION ROUSSELL y NOVALGINA Jarabe x 100 ml. Lote 1H092, Vto. 08/2003, LABORATORIO HOECHST MARION ROUSSELL.

Art. 2º — Regístrese, gírense copias certificadas de las presentes a la Comisión de Fiscales creada por Resolución Nº 54/97 de la Procuración General de la Nación, y al Ministerio de Salud de la Provincia de Formosa, a los fines de que tomen la intervención de su competencia; dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, comuníquese a quien corresponda. Dése copia al Departamento de Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese. — Manuel R. Limeres.

Dirección Nacional de Migraciones

DELEGACION DE FACULTADES

Disposición 7273/2002

Reordenamiento legal de diversas facultades que sucesivamente fueron conferidas, restringidas, ampliadas o modificadas en la Dirección Nacional de Migraciones.

Bs. As., 2/7/2002

VISTO el DECRETO Nº 1434/87 modificado por su similar Nº 1023/94, las DISPOSICIONES DNM Nº 16/94, 08/95, 11/95, 4725/96, 16248/01, 4737/02 y 6027/02, y

CONSIDERANDO:

Que la profusión de normas que regulan la actividad de las Delegaciones de esta Dirección Nacional en el interior del país, dificulta la comprensión de los alcances de la delegación de facultades que sucesivamente se han conferido, restringido, ampliado o modificado.

Que se hace necesario, consecuentemente, el reordenamiento legal de dichas facultades, lo cual clarificará el marco legal dentro del cual las Jefaturas de esas unidades deben desenvolverse, evitando eventuales nulidades de los actos emitidos por error en la aplicación de la norma.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 1º del REGLAMENTO DE MIGRACION aprobado por DECRETO Nº 1023/94.

Por ello;

EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE:

Artículo 1º — DELEGASE en los Jefes de las DELEGACIONES de esta DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES en el interior del país, la facultad de tramitar y resolver las residencias temporarias de extranjeros cualquiera sea su nacionalidad excepto las comprendidas en el artículo 3º.

Art. 2º — DELEGASE en los Jefes de las DELEGACIONES de esta DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES en el interior del país, la facultad de tramitar y resolver las residencias permanentes que se gestionen con fundamento en el artículo 15 inc. a) y b) del DECRETO Nº 1434/87 y sus modificatorios, de extranjeros cualquiera sea su nacionalidad excepto las comprendidas en el artículo siguiente.

Art. 3º — Las residencias temporarias y permanentes que se tramiten en las Delegaciones del interior del país gestionadas a favor de extranjeros de nacionalidad perteneciente a los continentes de ASIA, AFRICA y OCEANIA, serán remitidos para su resolución a la DIRECCION DE ADMISION DE EXTRANJEROS.

Art. 4º — Los trámites de regularización migratoria que se originen en las Delegaciones y Oficinas migratorias del interior del país, fundados en el artículo 15 inc. i) del Decreto Nº 1434/987 y sus modificatorios (migrante con capital), serán resueltos por la DIRECCION DE ADMISION DE EXTRANJEROS, cualquiera sea el tipo de residencia que se solicite.

Art. 5º — No se encuentran comprendidos en las limitaciones del artículo 3º y 4º, los casos en los que por aplicación en lo establecido en los DECRETOS Nº 1013/92 1033/92 y 1023/94, corresponda el cambio de calificación automático, de temporario a permanente.

Art. 6º — Los Jefes de las DELEGACIONES informarán por escrito y mensualmente a la DIRECCION DE ADMISION DE EXTRANJEROS el nombre y apellido, número de expediente y acto administrativo por el cual se efectúe el cambio de calificación al que hace referencia el artículo anterior.

Art. 7º — Aquellas actuaciones en las que se constaten inhabilidades absolutas o relativas emergentes de los artículos 21 y 22 del REGLAMENTO DE MIGRACION (aprobado por DECRETO Nº 1023/94), así como también aquellas en que se generaren dudas de interpretación, una vez presentada la totalidad de la documentación necesaria para resolver, deberán ser giradas a la DIRECCION DE CONTROL MIGRATORIO, DEPAR-

TAMENTO COORDINACION DE DELEGACIONES, a fin de su orientación y, de estimarlo procedente, darle la debida intervención a la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

Art. 8º — Exceptúase del procedimiento establecido en el artículo anterior cuando se tratare de inhabilidades relativas por ilegalidad de permanencia, (Arts. 21 inc. k) y 22 inc. i) del REGLAMENTO DE MIGRACION; RESOLUCION MI Nº 129/96), en cuyo caso se autoriza a los Jefes de las Delegaciones a resolver, siempre que se trate de actuaciones en las cuales, en razón de la nacionalidad de los extranjeros, esté facultado a resolver.

Art. 9º — La facultad de resolver que por los artículos 1º y 2º se delega, comprende la de eximir de documentación en el marco de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Migración, y del pago de tasas en los casos y bajo las condiciones establecidas en la legislación vigente.

Art. 10. — Las facultades delegadas por la presente, lo son sin perjuicio de la facultad de avocación que corresponde al Director Nacional, y de la facultad conferida por la DISPOSICION DNM Nº 4520/98 respecto de la resolución de recursos de revocatoria, la que se mantiene vigente.

Art. 11. — Respecto de las instrucciones que complementan la presente delegación de facultades, estése a la Disposición DNM Nº 21.735/01.

Art. 12. — REVOCANSE las DISPOSICIONES DNM Nº 16/94, 08/95, 11/95, 4725/96, 4737/02 y 6027/02 y el artículo 4º de la DISPOSICION DNM Nº 16248/01.

Art. 13. — La presente comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación.

Art. 14. — Regístrese y comuníquese. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación. Hecho. ARCHIVESE. — Juan M. Llavar.



TODO LO QUE USTED
NECESITA SABER
SOBRE EL
TRANSITO




En 2 separatas
editadas por la
Dirección Nacional
del Registro Oficial

VENTAS:

Suipacha 767, de 11.30 a 16 hs. y
Libertad 469, de 8.30 a 14.30 hs.





DELEGACION

en el

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS

Avda. Corrientes 1441 - Tel.: 4379-8700

Horario de 10 a 15.45 hs.

Que es conveniente modificar la Resolución N° 203/02 de esta Comisión haciéndola coincidir con la modificación establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO
DE LA COMISION FEDERAL DE IMPUESTOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Se dispone modificar el período del receso administrativo establecido por la Resolución N° 203/02, para el día 22 de julio y hasta el 2 de agosto del año 2002, ambas fechas inclusive, a los efectos de que el mismo coincida con la Feria Judicial.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. — Dr. ERNESTO C. CABANILLAS, Secretario. — Dr. ALBERTO C. REVAH, Presidente.

e. 5/7 N° 387.216 v. 5/7/2002

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Resolución N° 2626/2002

Bs. As., 14/6/2002

VISTO el Expediente N° 4692 del Registro del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), lo dispuesto en la Ley N° 24.076, su reglamentación establecida por el Decreto N° 1738 del 18 de Septiembre de 1992, y el Anexo I Punto X del Régimen de Penalidades del Decreto N° 2451, y,

CONSIDERANDO:

Que en fecha 15/12/98 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. (SUR) informó que el 14/12/98 a las 09:30 hs. se produjo una rotura de la cañería de distribución de 38 mm de diámetro en calle Cambrin esquina Condarco, de la Localidad de Trelew, Provincia del Chubut.

Que continuó indicando que el operativo de corte de servicios, reparación de la rotura y la posterior rehabilitación del suministro culminó a las 17:00 hs., afectando ese inconveniente a 10 usuarios.

Que prosiguió expresando que la rotura la produjo maquinaria perteneciente a la firma OBRAS TRELEW, S.A. (OBRAS TRELEW), que realizaba tareas de movimiento de suelo para pavimentación, por cuenta y orden de la MUNICIPALIDAD DE TRELEW (la MUNICIPALIDAD); que ambos contaban con el Plan de Prevención de Daños y que la última de las nombradas, también contaba con la documentación de interferencias correspondiente para la ejecución de las obras.

Que esta Autoridad le requirió a OBRAS TRELEW y a la MUNICIPALIDAD información complementaria respecto al tema en cuestión (NOTA ENRG/GD/GAL N° 249/99 obrantes a (fs. 3 a 4 y 5 a 6).

Que OBRAS TRELEW respondió a fs. 12, informando de las tareas que desarrollaba en el momento del incidente, como así también que en fecha 27/11/98 solicitó a SUR información detallada de las instalaciones que poseía en las siguientes arterias: a) Condarco entre Michael Jones y Cambrin y b) Cambrin entre Condarco y Belgrano.

Que señaló también que SUR respondió la nota con posterioridad al 14/12/98 fecha en que se produjo el hecho, haciéndolo el 14/01/99 de forma incompleta, acreditando que en la nota citada en el párrafo anterior, SUR fue informado de la fecha de inicio de los trabajos.

Que también acompañó a su presentación, fotografías de la zona del incidente en las que evidencia la profundidad del caño existente respecto del nivel de vereda (0,60 m), del nivel de suelos de las adyacencias y calle transversal (0,60 m).

Que por su parte adujo que la máquina que estaba trabajando no alcanzó la cañería nombrada sino una derivación que se encontraba a aproximadamente a 0,40 m de profundidad y que, luego de reparada la rotura, SUR colocó la derivación a una profundidad de 1,50 m, lo que, a su criterio pone de manifiesto que la anterior tapada no era reglamentaria.

Que de dicha presentación se le corrió vista a SUR (NOTA ENRG/GD/GR/GAL N° 1013, existente a fs. 20), quien la respondió mediante nota CR/O/MN/vch/N° 0616 (fs. 21), en la que expuso que el 16/02/98 había entregado la documentación técnica relativa a las obras de pavimentación que se venían llevando a cabo en el sector correspondiente a la calle Cambrin entre Belgrano y Rivadavia de esa localidad.

Que agregó que el 24/03/98 remitió a OBRAS TRELEW una actualización del Plan de Prevención de Daños.

Que expresó SUR que en fecha 07/09/98, OBRAS TRELEW había solicitado las interferencias existentes en la zona de trabajo y que SUR, el 14/09/98, procedió a la entrega de planchetas y Anexo I (Recomendaciones acerca de cateos, especificaciones técnicas etc.) referidas entre otras, a la calle Cambrin e/Condarco e Yrigoyen, lugar donde se produjo el incidente.

Que en su nota SUR no hace mención a la solicitud presentada por OBRAS TRELEW el 27/11/98, donde fue informada de la fecha de iniciación de las obras.

Que de las constancias obrantes en estas actuaciones, surge claramente por un lado, que las tareas de excavación se realizaron en forma negligente dado que OBRAS TRELEW, faltó a su obligación de realizar los cateos en forma manual, y previa al comienzo de las actividades, donde se presume la existencia de ductos conductores de gas y que esa empresa inició los trabajos sin la inspección de la Distribuidora.

Que por otro lado, habiendo sido notificado SUR por, OBRAS TRELEW de la proximidad de la iniciación por actividades de excavación a realizarse dentro del área de su jurisdicción, no tomó las medidas precautorias que las circunstancias aconsejan para prevenir daños a sus activos esenciales.

Que por lo antedicho, esta Autoridad Regulatoria imputó a SUR —en los términos del Artículo 10.2.9 de las Reglas Básicas de la Licencia— el haber incumplido los requisitos establecidos en la NAG 100, Sección 614 Apartados 5) y 6) y en su propio Programa para Prevención de Daños, y OBRAS TRELEW S.A. en los términos del Artículo 71 de la Ley 24.076, los incumplimientos antes mencionados y el haber sido autor material del hecho bajo análisis.

Que tanto OBRAS TRELEW como SUR presentaron sus descargos en tiempo y forma, siendo que el primero de ellos obra 41 a 103 y el segundo, a fs. 104 a 107 de autos.

Que OBRAS TRELEW arguyó la nulidad del procedimiento por afectación del derecho de defensa, porque el Artículo 71 de la Ley 24.076, invocado como fundamento de la imputación de la conduc-

ta, sólo autoriza a la aplicación de las sanciones que allí prevé cuando se haya producido violaciones o incumplimientos de dicha Ley y sus normas reglamentarias, siendo que en la nota de imputación no se precisó qué norma ha violado o incumplido.

Que prosiguió su exposición indicando que —por el contrario— en dicha nota sólo se hizo mención que esa empresa había faltado a su obligación de realizar los cateos en forma manual y previa al comienzo de las actividades, donde se presume la existencia de ductos de gas y que inició los trabajos sin la inspección de la distribuidora, afirmando que en ambos casos no existe norma alguna que establezca, dichas obligaciones.

Que finalizó su argumentación sobre este tópico recordando que la ley es la única fuente inmediata del derecho penal o contravenciones y que si bien a veces ésta puede otorgar una autorización genérica, pero ello nunca puede ser entendido como un precepto que acuerda facultades para crear la figura, la infracción misma, poder que el Congreso no puede delegar.

Que en consecuencia, aseveró que de insistirse en la imputación de una conducta y consecuente aplicación de una sanción sin invocarse qué norma se está infringiendo, claramente se estaría violentando los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Que también se agravió por considerar afectado su derecho a defensa en razón de que en la nota de imputación no se fijó cuál sería la sanción correspondiente a las imputaciones efectuadas, cuando justamente el artículo 71 se refiere a las sanciones que pueden ser aplicadas y con respecto a la multa establece una graduación con un amplio margen de discrecionalidad para su fijación.

Que también planteó que si bien la notificación de la imputación se efectúa el día 22 de Enero de 2000, recién el día 31 de ese mismo mes y año pudo tomar vista del expediente, razón por la cual ese día presentó una nota solicitando que el plazo de diez días sea computado desde la vista, sin haber recibido respuesta alguna y que por el contrario, a SUR se le ha corrido vista del expediente, afectando de esta manera el principio de igualdad y del debido proceso, ambos de raigambre constitucional.

Que finalizó la expresión de los agravios que —según su óptica— deberían dar origen a la nulidad del procedimiento indicando que la nota de imputación carece de fundamentos ya que no fue notificado el dictamen jurídico previo o al menos no se volcó en ella, las consideraciones del mismo.

Que luego y para el supuesto caso de que esta Autoridad Regulatoria no haga lugar a la nulidad planteada, pasa a detallar las razones por las cuales entiende que no le corresponde responsabilidad alguna en el evento dañoso que se investiga.

Que en primer lugar recordó que se le imputó el no realizar los cateos previos donde se presume la existencia de ductos conductores de gas, imputación ésta que —según su criterio— cae por su propio peso, porque jamás podría “presumir” la existencia de cañerías en la profundidad hasta la cual se efectuó la excavación porque que se encuentren allí es antirreglamentario.

Que asevera que su posición se encuentra avalada en el hecho de que la Sección 327 Tabla 327 111) de las NAG 100, surge que la tapada mínima para la instalación de cañerías en calzada es 0.80 m para diámetros nominales entre 38 y 305 mm.

Que sostuvo que la derivación que sufrió la rotura se encontraba a tan sólo 0.40 m bajo el nivel de vereda y aún a menos profundidad bajo el nivel de la calle (conforme fotografías oportunamente acompañadas y acta de escribano que se acompaña).

Que consideró que es prueba de ello también el hecho de que en la reparación del daño efectuada por SUR se coloca la nueva conducción a 1,50 mts. de profundidad respecto del nivel de la vereda, reconociendo de esta manera la inadecuada ubicación anterior.

Que entendió en consecuencia, que lo antedicho sirve como argumento para excluir su responsabilidad en el hecho.

Que también trajo a colación que se le imputó el haber iniciado los trabajos de excavaciones sin inspección de la Distribuidora.

Que al respecto reiteró que ninguna norma impone la obligación de no dar inicio a los trabajos sin previa inspección de la distribuidora y que la empresa ha cumplido con la precaución de solicitar información a SUR respecto de la ubicación de las cañerías en el lugar del hecho, como asimismo de informar el comienzo de la obra con la debida anticipación (conforme nota de fecha 27 de noviembre de 1998), cumpliendo de esta manera íntegramente con las recomendaciones del “Plan Integral para Prevención de Daños”.

Que luego pasa a transcribir un párrafo de la nota que le remitió SUR informando la implementación de dicho plan, considerando que de ella se desprende claramente que: a) las empresas cumplen con las precauciones a su cargo poniendo en conocimiento la proximidad del inicio de la obra y solicitando la información pertinente (ni siquiera es obligatorio sino que hace justamente a las precauciones que OBRAS TRELEW ha tomado) y b) la Distribuidora dará la respuesta y personal de su dependencia se hará presente en la obra (ya no como facultad sino como deber, incumplido en este caso).

Que entiende entonces la imputada que poner en su cabeza la responsabilidad de haber comenzado la obra sin los inspectores de SUR es ir mas allá no sólo de lo previsto normativamente sino también de lo razonable, máxime cuando, por el contrario a lo sostenido por el ENARGAS, OBRAS TRELEW tenía muchas más razones para “presumir” que a la profundidad de excavación a la que se llegaría no se encontrarían cañerías de gas, salvo que también, como se intenta en el caso, se ponga en cabeza de la misma presumir lo antirreglamentario, lo que es absolutamente absurdo.

Que luego pasa a rebatir los argumentos expuestos por SUR para deslindar su responsabilidad, los que no corresponde que sean analizados en este estadio, dado que nada tienen que ver con la imputación que se le efectuara a esa Licenciataria de Distribución.

Que finalizó su descargo haciendo referencia a que la culpa en la producción de un hecho no debe presumirse, trayendo a colación varias opiniones doctrinarias sobre el particular y concluyendo en suma que en el caso de autos jamás podía ser previsto que las cañerías se encuentren ubicadas a una profundidad antirreglamentaria.

Que por su parte SUR en su descargo señaló que en el informe intergerencial se dijo que “... habiendo sido notificado SUR por la empresa OBRAS TRELEW de la proximidad de la iniciación por actividades de excavación ..., no tomó las medidas precautorias que las circunstancias aconsejan para prevenir daños a sus activos esenciales” en el que también se invocaron los Apartados 5) y 6) de la NAG 100, en su Sección 615.

Que afirmó que las constancias de autos revelan (ratificado por la propia causante del siniestro) que OBRAS TRELEW no contaba con la autorización de inicio de obras otorgado por esa Licenciataria por lo que, continuó diciendo, que resulta evidente entonces que ella mal pudo disponer las acciones indicadas en los apartados 5) y 6) de la NAG 100.

Que argumentó que, tanto la indicación “tan pronto como corresponda” a la que refiere el apartado 5), como la prescripción del apartado 6) “que el operador tiene razonable creencia”, reflejan el momento en el cual la Licenciataria debe, según su saber y entender, disponer aquellas medidas.

Que adujo que, tal como es reconocido por la propia firma, OBRAS TRELEW no recibió autorización para iniciar los trabajos, alegando que ello permite concluir que mal puede exigírsele a SUR proceder conforme a lo indicado por los apartados 5) y 6) si no estaban dados los presupuestos que requerían adoptar tales medidas.

Que agregó que la norma es clara en cuanto a delegar en el operador, la evaluación de la oportunidad en que tales acciones deben adoptarse, por lo que especifica que, en este caso, no estaban dadas, sencillamente porque no se había expendido autorización alguna a OBRAS TRELEW para que inicie los trabajos.

Que conforme a lo relatado y a las constancias de autos, solicitó se le exima de sanción ya que — según su óptica— obró conforme a la norma, al marco de autonomía y a la discrecionalidad que la misma delega en el operador.

Que introduciéndonos al análisis del descargo de OBRAS TRELEW, entendemos que correspon- de rechazar los argumentos tendientes a demostrar que el procedimiento sancionatorio iniciado resul- taba nulo, ya que resulta incorrecto que el esta Autoridad no haya precisado cuál es la norma violada o incumplida.

Que ello es así porque para identificar el incumplimiento normativo, existen dos vías igualmente idóneas: una consiste en la “indicación del artículo, inciso etc”, de la norma técnica correspondiente, y la otra es describir la conducta infractoria, siendo que este Organismo optó por esta última alternativa, al expresar en su nota de imputación que “...esa Empresa faltó a su obligación de realizar los cateos en forma manual y previa al comienzo de las actividades donde se presuma la existencia de ductos conductores de gas y además inició los trabajos sin la inspección de la distribuidora”.

Que no obstante lo antedicho y a mayor abundamiento, cabe consignar que la norma incumplida, es la NAG 100, que en su Sección 614, Material de Guía inc. 2.7 b) 3) establece que el operador, en este caso SUR debe fijar en su Programa de Prevención de Daños, que : “ ... deberá señalar que el marcado representa sólo la posición horizontal aproximada de las instalaciones y que las mismas deberán ser detectadas mediante excavación manual para verificar su ubicación”, circunstancia que era de conocimiento de la contratista (fs. 77, 91, 92 y 103).

Que otro argumento que no resiste el menor análisis lógico y jurídico es el referido a la falta de indicación de cuál sería la sanción que le pudiera aplicar, ya que tal obligación no está fijada en ninguna norma.

Que además, si como reconoce la imputada, el inciso a) del art. 71 de la Ley N° 24.076 fija que la sanción, de multa puede oscilar entre los PESOS CIEN (\$) 100) y CIEN MIL (\$) 100.000) son éstos precisamente los parámetros mínimo y máximo en caso que este Organismo juzgue pertinente multar- la.

Que por su parte, si bien la notificación de la imputación fue el 22/01/00 OBRAS TRELEW no vio afectado su derecho a defensa, puesto que al haberse materializado tal notificación en el mes de feria (Resolución ENARGAS N° 241) el plazo para efectuar el descargo recién comenzó a correr a partir del primer día hábil del mes de febrero de 2000, por lo que, de hecho el plazo solicitado por nota, estaba de por sí otorgado, no siendo necesario una nota que reitere tal concesión.

Que además, desde la fecha en que se presentó dicho descargo (4/2/2000) hasta el día de la fecha, la imputada bien pudo efectuar otras presentaciones ampliatorias del mismo, hecho éste que también debe tenerse en cuenta al momento de analizar si se encuentra garantizado su derecho a defensa.

Que asimismo, carece de todo asidero el argumento vinculado con la falta de fundamentación de la nota de imputación, ya que el art. 7 inciso “d” in fine de la Ley Nacional de Procedimiento Administra- tivo establece como requisito esencial de los actos administrativos la existencia del Dictamen Jurídico previo, extremo éste que la imputada no puede desconocer ya que el mismo data del 13 de octubre de 1999 (fs. 29 a 31 de autos), habiendo tomado vista de todo el expediente según constancias de fs. 39.

Que además tampoco se compadece con la verdad, su aseveración acerca de que en la nota de imputación no se volcó consideraciones vertidas en el dictamen previo, ya que lo fijado en el segundo párrafo de la aludida nota, se corresponde totalmente con lo mencionado en el primer párrafo de las conclusiones del Informe intergerencial.

Que ahora bien, introduciéndose al fondo de la cuestión, OBRAS TRELEW sostuvo a fs. 44 que la ubicación real de las cañerías involucradas no era reglamentaria, por cuanto no podría presumir la existencia de éstas “...a la profundidad en que se efectuó la excavación”.

Que en este sentido cabe destacar que esa firma había sido notificada por SUR que, dada la antigüedad de la cañería, la información con que cuenta la Licenciataria podría no ser precisa.

Que no obstante ello y aun cuando las instalaciones no se encontrasen en condiciones reglamen- tarias, no exime a OBRAS TRELEW de la responsabilidad de la necesidad de realizar cateos previos para la ubicación de las cañerías de gas, independientemente de la profundidad a la que debía realizar sus excavaciones.

Que también es de señalar que fue la misma OBRAS TRELEW quien aportó documentación, acompañando el descargo (fs. 77, 91, 92 y 103 de la que se desprende que fue notificada de las “Especificaciones Técnicas Generales para el Tratamiento de Interferencias de Cañerías de Gas Natu- ral”, elaborado por SUR, además de que tenía conocimiento de la posibilidad de la falta de precisión en la información brindada respecto de la ubicación de cañerías de gas, por ende la necesidad de realizar cateos manuales para localización de éstas.

Que por otra parte, es en el mismo descargo, en el que OBRAS TRELEW reconoce (fs. 45), que fue avisada por la Licenciataria que personal de la misma, en caso de existencia de cañerías en zona de trabajos se presentaría en el lugar, en fecha y hora indicada para señalar la instalación.

Que en tal sentido en la comunicación de la proximidad del inicio de obras por parte de OBRAS TRELEW (fs. 11, 14, 26, 28), ésta reconoce que sus trabajos pueden afectar conducciones de servi- cios públicos ocultas en el subsuelo, lo que indica que esa empresa fue consciente de los inconvenien- tes que podría generar el daño a aquéllos.

Que en ese orden de ideas y en conocimiento que SUR tenía la obligación de presentarse en la obra para señalar los ductos de conducción de gas (como la misma contratista lo señala a fs. 45), OBRAS TRELEW debió reiterar su solicitud a la Licenciataria precisando lugar, fecha y hora de los trabajos.

Que resulta necesario destacar que este Organismo no sostuvo en la imputación, que OBRAS TRELEW debía presumir que a la profundidad de la excavación a la que se llegaría, se encontraría la cañería afectada, sino la presunción aludida, se refiere a la existencia de ductos en la zona de traba-

jos; por ello el cateo se realiza precisamente como un evento precautorio que permite determinar la ubicación exacta de ellos, frente a una posible localización imprecisa de las instalaciones.

Que asimismo, surge de lo expuesto a fs. 46 que la imputada realizó los trabajos en la esquina de Cambrin y Condarco, sin disponer de la información relativa a la existencia de instalaciones de gas, dado que SUR le envió dicha información con posterioridad al evento de referencia.

Que resulta indudable OBRAS TRELEW que pretende que recaiga sólo en SUR la responsabili- dad del hecho bajo análisis, por el incumplimiento de sus deberes como Distribuidora, pero tal preten- sión es también contraria a derecho ya que esa firma contratista tenía pleno conocimiento de las acciones que debía implementar previo al inicio de las obras.

Que SUR planteó en su descargo que este Organismo invocó en su nota de imputación a Sección 614 “Programa de Prevención de Daños” de la norma NAG 100 y no la Sección 615 “Planes de Emer- gencia”.

Que la alegación de la falta de autorización de su parte para que OBRAS TRELEW pueda dar inicio a las obras, no la exime de responsabilidad ya que la normativa vigente (NAG 100), no le exige a las contratistas efectuar tal solicitud y consecuentemente no le otorga facultades a SUR para emitir autorización alguna, más aun cuando se trata de obras no relacionadas con instalaciones de gas.

Que por ello, la pretensión de SUR de deslindar su responsabilidad en el hecho acaecido, porque la contratista no había sido autorizada por ella a iniciar los trabajos, carece de todo fundamento.

Que por el contrario, dicha norma le obliga a la Licenciataria a cumplir y hacer cumplir su Plan de Prevención de Daños, acción ésta tendiente a prevenir daños a sus instalaciones provenientes de actividades de excavación.

Que quedó claramente demostrado en autos que SUR estaba en pleno conocimiento del inicio de las actividades de OBRAS TRELEW y de la magnitud de las mismas, como así también que éstas se realizarían en zonas servidas por redes de distribución de gas.

Que ésto nos indica que, contrariamente a lo expuesto por SUR, estaban dados todos los presu- puestos que se requieren para adoptar las medidas establecidas en la Sección 614 de la NAG 100, por lo que debió implementarlas en forma previa a los trabajos de excavación y sin necesidad de extender una autorización expresa a la contratista para que inicie esas tareas.

Que por todo lo expuesto, esta Autoridad Regulatoria entiende que corresponde: a) no hacer lugar al planteo de nulidad del procedimiento presentado por OBRAS TRELEW; b) sancionar a esa empresa porque faltó a su obligación de realizar los cateos en forma manual, y previa al comienzo de las actividades, donde se presuma la existencia de ductos conductores de gas y que esa empresa inició los trabajos sin la inspección de la Distribuidora; y a SUR porque incum- plió con lo establecido en la NAG 100, Sección 614 Apartados 5) y 6) y en su propio Programa para Prevención de Daños.

Que además, independientemente de la sanción que se le imponga, corresponde que SUR pague a los usuarios afectados la suma equivalente a UN (1) cargo fijo, el que deberá incorporar- se en la facturación por consumo de gas correspondiente al primer período posterior a los QUIN- CE (15) días, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, incluyendo en dicho instrumento la leyenda “Pago ordenado por Resolución ENARGAS N° (incluir el número de esta Resolución)”.

Que SUR deberá, dentro de los DIEZ (10) días posteriores al vencimiento del plazo fijado en el considerando anterior, poner a disposición de esta Autoridad un soporte magnético conteniendo la nómina de usuarios afectados a los que se les efectuó el pago.

Que dicho soporte deberá cumplir con los requisitos que seguidamente se detallan: a) Diskette 3 1/2”, b) Formato Excell para Windows y c) Archivo con celdas protegidas con utilización de contraseña, para evitar que dichos datos puedan ser modificados.

Que la presente Resolución se dicta de conformidad a las facultades otorgadas por el Artículo 59 inciso a) de la Ley N° 24.076 y lo previsto en el Sub-Anexo I, punto X del Decreto N° 2255 y Decreto N° 2451/92.

Por ello	EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS RESUELVE:
ARTICULO 1° — No hacer lugar al planteo de Nulidad del Procedimiento esgrimido por OBRAS TRELEW S.A.	
ARTICULO 2° — Sancionar a OBRAS TRELEW S.A. con Multa de PESOS CINCO MIL (\$) 5.000) porque faltó a su obligación de realizar los cateos en forma manual, y previa al comienzo de las actividades, donde se presuma la existencia de ductos conductores de gas y que esa empresa inició los trabajos sin la inspección de la Distribuidora.	
ARTICULO 3° — Sanciónase a CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. Con una multa de PESOS CINCO MIL (\$) 5.000.-) en razón de haber incumplido con lo establecido en la NAG 100, Sección 614 Aparta- dos 5) y 6) y en su propio Programa para Prevención de Daños.	
ARTICULO 4° — El pago de las multas antes mencionadas deberá efectivizarse en la Cuenta del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, Cuenta Corriente 2930/92 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS - 50/651 - CUT Recaudadora Fondos de Terceros.	

ARTICULO 4° — Dispónese que CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. —independientemente de la sanción impuesta en el Artículo tercero— pague a los usuarios afectados la suma equivalente a UN (1) cargo fijo, el que deberá incorporarse en la facturación por consumo de gas correspondiente al primer período posterior a los QUINCE (15) días, contados a partir de la notificación de la presente Resolu- ción, incluyendo en dicho instrumento la leyenda “Pago ordenado por Resolución ENARGAS N° (in- cluir el número de esta Resolución)”.

ARTICULO 5° — La Licenciataria deberá poner a disposición de esta Autoridad Regulatoria un soporte magnético —con los requisitos expuestos en los considerandos de la presente resolución— conteniendo la nómina de usuarios afectados a los que se les efectuó el pago, dentro de los DIEZ (10) días contados a partir del vencimiento del plazo fijado en el Artículo 4°.

ARTICULO 6° — Notifíquese a OBRAS TRELEW S.A. y a CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., publí- quese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Ing. JOSE AN- DRES REPAR, Vicepresidente, Ente Nacional Regulador del Gas. — Ing. HECTOR E. FORMICA, Presidente Ente Nacional Regulador del Gas.

EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO HA SIDO SUSCRITO POR LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL ENARGAS CON MANDATO VIGENTE. CONSTE. — Dra. MARCELA PAULA VALDEZ, Secretaria del Directorio.

e. 5/7 Nº 387.234 v. 5/7/2002

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Resolución Nº 150/02

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio del año dos mil dos, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la Presidencia del Dr. Juan C. Gemignani, los señores consejeros presentes,

VISTA.

La resolución 135/02 mediante la cual se aprueba el “Reglamento para la elección de los representantes de los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para la integración del Jurado de Enjuiciamiento”, y

CONSIDERANDO:

1º) Que en los artículos 3º y 23 de la ley 24.937 (t.o. por decreto 816/99) se estableció que los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva.

2º) Que el 17 de noviembre de 1998 se formalizó la incorporación de los Dres. Juan M. Gersenobitz, Angel F. Garrote, Diego J. May Zubiria y Eduardo D.E. Orio, quienes, en representación del estamento de los abogados, fueron electos mediante los comicios que se llevaron a cabo el 6 de julio de 1998.

3º) Que la mencionada ley establece en el artículo 33 que, hasta tanto se constituyera el Consejo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confeccionaría los padrones correspondientes a los jueces y abogados de la matrícula federal, y que la Federación Argentina de Colegios de Abogados organizaría la elección de los abogados de la matrícula federal, bajo la supervisión y fiscalización de la Corte Suprema.

4º) Que el 22 de mayo del año en curso, el Plenario del Cuerpo aprobó el Reglamento para la elección de los representantes de los abogados, fijando la normativa que rige el proceso de designación de quienes lo integrarán actuando en nombre del citado estamento.

5º) Que en el artículo 11 de dicho reglamento se dispone que la convocatoria a las elecciones sea efectuada por el Consejo de la Magistratura en coordinación con la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con noventa (90) días de anticipación a la fecha de los comicios y, además, que ella sea publicada por dos días en el Boletín Oficial de la República Argentina y en dos diarios de circulación nacional, a efectos de que los interesados soliciten el registro de las listas con una antelación de cuarenta y cinco (45) días a la fecha fijada para las elecciones, contados a partir de la publicidad dispuesta.

6º) Que en el artículo 6º del reglamento vigente, se establece que los padrones provisorios confeccionados por la Secretaría General del Consejo de la Magistratura deben ser aprobados por el Plenario y remitidos por la Federación Argentina de Colegios de Abogados a todos los Colegios de Abogados que la integren y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para su exhibición pública inmediata.

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Convocar a la elección de los abogados que compondrán el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento para el 1º de octubre del año 2002.

2º) Ordenar la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los diarios “Clarín” y “La Nación” por el término de dos (2) días.

3º) Aprobar los padrones provisorios confeccionados por la Secretaría General del Consejo de la Magistratura y ordenar su remisión a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando 6º.

4º) Comunicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del reglamento aprobado, todos los plazos establecidos deberán computarse en días corridos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por ante mí, que doy fe.

MIGUEL A. PICHETTO. — JORGE R. YOMA. — MARGARITA A. GUDIÑO DE ARGÜELLES. — JORGE O. CASANOVAS. — MARIA LELIA CHAYA. — MARCELO STUBRIN. — EDUARDO D. E. ORIO. — HUMBERTO QUIROGA LAVIE. — BINDO B. CAVIGLIONE FRAGA. — DIEGO J. MAY ZUBIRIA. — ANGEL F. GARROTE. — JUAN C. GEMIGNANI. — PABLO G. HIRSCHMANN, Secretario General del Consejo de la Magistratura.

NOTA: Se publica nuevamente en razón de haberse omitido en la edición del 1/7/2002.
e. 5/7 Nº 386.918 v. 8/7/2002

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

PODER JUDICIAL DE LA NACION

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION —ARCHIVO GENERAL— del Poder Judicial de la Nación.

CDE. ACT. Nº 10816/02-11702/02-12021/02Y 12412/02

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 23º del Decreto-Ley Nº 6848/63, Ley Nº 16.478, se hace saber a los interesados que serán destruidos los expedientes judiciales correspondientes a los Juzga-

dos Nacionales de Primera Instancia en lo CORRECCIONAL Nº 7 a cargo de la Dra. MARIA L. GARRIGOS de REBORI, Secretaría Nº 56 a cargo de la Dra. GRACIELA ANGULO de QUINN, correspondientes al año 1977 a 1991; Y Secretaría Nº 57 a cargo del Dr. CARLOS H. AOSTRÍ, correspondientes a los años 1984 a 1987; CIVIL Nº 13 a cargo del Dr. ADOLFO GRANILLO OCAMPO, correspondientes a los años 1972 a 1990; CIVIL Nº 98 a cargo del Dr. ALBERTO P. NARVAEZ, correspondientes al año 1945 a 1991, y que estén comprendidos en el art. 17º de dicho Decreto-Ley. Las partes interesadas en la conservación de alguno de ellos, podrán requerirla por escrito ante el Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes del vencimiento de los treinta (30) días de esta publicación, debiendo justificar en dicho acto el interés legítimo que les asiste. — Dr. AUGUSTO J. FERNANDEZ PINTO, Director General, Archivo General del Poder Judicial de la Nación.

e. 3/7 Nº 386.299 v. 5/7/2002

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido Emilio Nicolás TURESSO, alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 21 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo 15/91, para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5º Piso, Oficina Nº 5039/41, Capital Federal. 26 de junio de 2002. Firmado: Alicia Inés LORENZONI de SANGUINETI Jefe (Int.) Sección “J” División Beneficios.
e. 3/7 Nº 386.859 v. 5/7/2002

PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

Resolución APN Nº 83/2002 Honorable Directorio

Expediente Nº 633/2001

Bs. As., 20/6/2002

La ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES notifica: Derógase las Resoluciones Nros. 479/92 y 154/2002 del Presidente del Directorio; 98/94, 173/95 y 78/99 del Honorable Directorio, y 192/2000 del entonces Interventor en esta Administración; ratifícase la vigencia de la Resolución Nº 204/96 del Honorable Directorio, sobre derechos de actividad comercial correspondientes a la explotación de estaciones de servicio, excepto en cuanto a su monto; ratifícase la vigencia de la Resolución Nº 144/2001 del Honorable Directorio, por la cual se aprobara la normativa para la realización de actividades fílmicas y de fotografía publicitaria en jurisdicción de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, y apruébase el TARIFARIO que obra en Anexo I. Firmado: Ing. Agr. LUIS ALBERTO REY, Presidente del Directorio; Sr. OSCAR JOSE VACCA, Vicepresidente del Directorio; Sr. ALBERTO EDUARDO ELIZONDO; Gpque. NESTOR WALTER SUCUNZA y Sr. BRUNO CARPINETTI, Vocales del Directorio.

La versión completa de la Resolución puede ser consultada por los interesados en el BOLETIN OFICIAL DE LA NACION.

e. 4/7 Nº 387.103 v. 5/7/2002

PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

Resolución APN Nº 85/2002 Honorable Directorio

Expediente Nº 802/2001

Bs. As., 20/6/2002

La ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES notifica: Apruébase el “Reglamento de Guías en Areas Protegidas Nacionales”, obrante en Anexo I. Firmado: Ing. Agr. LUIS ALBERTO REY, Presidente del Directorio; Sr. OSCAR JOSE VACCA, Vicepresidente del Directorio; Sr. ALBERTO EDUARDO ELIZONDO; Gpque. NESTOR WALTER SUCUNZA y Sr. BRUNO CARPINETTI, Vocales del Directorio.

La versión completa de la Resolución puede ser consultada por los interesados en el BOLETIN OFICIAL DE LA NACION.

e. 4/7 Nº 387.106 v. 5/7/2002



HORARIO DE ATENCION

SEDE CENTRAL - SUIPACHA 767 - CAPITAL FEDERAL
11:30 A 16:00 HORAS

DELEGACION TRIBUNALES - LIBERTAD 469 - CAPITAL FEDERAL
8:30 A 14:30 HORAS

DELEGACION COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
Avda. CORRIENTES 1441 - CAPITAL FEDERAL
10:00 A 15:45 HORAS